

PROTECCIÓN JURÍDICA Y ASISTENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Por

NÚRIA TORRES ROSELL / CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE
Profesora agregada interina de Derecho penal / Profesora Titular de Derecho penal,
acred. Catedrática
Universitat Rovira i Virgili / Universitat de Lleida

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 27 (2017)

RESUMEN: La realización de un estudio empírico en el que han participado 37 profesionales del ámbito del proceso penal así como del ámbito asistencial ha permitido conocer en profundidad los mecanismos de los que los profesionales disponen y que más útiles resultan para garantizar la protección de las víctimas de trata de seres humanos. En el ámbito del proceso penal el trabajo se centra en medidas de protección tales como el reconocimiento del período de restablecimiento y reflexión, la aplicación de medidas de protección contenidas en la LO 19/1994, de protección de testigos y peritos en causa criminales, y la preconstitución de la prueba testifical. En el ámbito de la asistencia personal y social a las víctimas se analiza la labor prestada fundamentalmente por ONGs y otras entidades del tercer sector y la interacción de estas entidades con el resto de profesionales del sistema de justicia penal.

PALABRAS CLAVE: Trata de seres humanos, víctimas, asistencia, protección, proceso penal.

LEGAL PROTECTION AND ASSISTANCE FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

ABSTRACT: The paper presents the results of an empirical research with 37 professionals from the fields of Criminal process and from assistance to victims. The research has allowed to learn the mechanisms available for professionals and those considered more useful to guarantee the protection of victims of trafficking in human beings.

In the context of the Criminal proceedings, the work focuses on protection measures such as the period of reinstatement and reflection, the application of protection measures contained in LO 19/1994, the protection of witnesses and experts in criminal trials, and the preconstitution of the testimonial evidence. In the context of personal and social assistance to victims, the work done by NGOs and other agencies in the third sector is analysed, as well as the interaction of these organisations with the rest of the professionals from the Criminal justice system.

KEY WORDS: Trafficking in human beings, victims, assistance, protection, criminal process.

I. INTRODUCCIÓN

El viraje hacia una aproximación victimocéntrica en el abordaje del fenómeno de la trata de seres humanos ha impulsado un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas y ha puesto de relieve la necesidad de una estrategia contra este fenómeno que mantenga a aquellas en el primer plano. El emprendimiento de esta orientación victimocéntrica resulta de constatar que las medidas de carácter estrictamente incriminatorio devienen insuficientes para poner fin a una lacra que la modernidad ha podido incluso favorecer, observándose, en pleno siglo XXI, modelos actualizados de la perenne esclavitud. El desarrollo de políticas de protección de las víctimas y de prevención de la victimización se ha venido presentando tanto en el ámbito normativo¹ como en la literatura científica (OKOBATA, 2005, 2006; VILLACAMPA, 2011) como la intervención más adecuada a largo plazo. Desde la aprobación del Protocolo de Palermo en 2001 la estrategia de tratamiento holístico del fenómeno de la trata gira entorno a lo que se conoce como política 3P por su mención a la *protección* de las víctimas, la *prevención* de las conductas y la *persecución* de las mismas.

La investigación que se presenta centra su objeto de análisis precisamente en la primera de las *Ps* enunciadas, esto es, la relativa a la protección y la asistencia a las víctimas de trata. El estudio se focaliza en la experiencia de intervención tuitiva de los profesionales que por razón de su trabajo entran en contacto con tales víctimas en España. Para ello la investigación se apoya en las entrevistas en profundidad desarrolladas con un total de 37 profesionales procedentes tanto del ámbito forense -en el que se comprenden, policías, fiscales, jueces, abogados y funcionarios penitenciarios-, como del ámbito asistencial -básicamente, técnicos de oficinas de atención a la víctima (OAV) y miembros de ONGs y entidades del tercer sector. La protección y la asistencia que todos estos profesionales dispensan a las personas que han sido sometidas a procesos de captación, traslado y explotación en un contexto de violencia, intimidación, engaño o abuso de vulnerabilidad, comprende el reconocimiento de sus derechos en cuanto víctimas de un grave delito. En el marco del proceso penal ello supone el reconocimiento del derecho a ser informadas y asesoradas de forma comprensible, el

¹ En este sentido, a nivel internacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000-Protocolo de Palermo-; el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, firmado en Varsovia el 16 de mayo de 2005 -Convenio de Varsovia-, y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo

derecho a la intimidad y a la protección, evitando la confrontación visual con su ofensor y sin el empleo de técnicas de interrogatorio inquisitivas, y el derecho a la indemnización. Por otro lado, en el ámbito de la protección social, el reconocimiento de tales derechos debería traducirse en el acceso a un alojamiento seguro, la orientación psicológica, el cuidado de la salud y la orientación profesional.

La materialización de los derechos de protección y asistencia requiere de una labor que generalmente precede a la prestación de tales servicios y que no es sino la de identificación de las víctimas de la trata. En este sentido, la identificación constituye el eslabón necesario para poder dispensar a aquellas la asistencia que requieren para su recuperación personal tras la experiencia traumática de la victimización. Pero a la vez, los efectos de la trata son frecuentemente tan devastadores que sin una adecuada intervención psicológica y social puede no llegar a detectarse la situación de violencia, engaño o abuso por la que ha transitado la víctima en el camino a su explotación. Esto es, sin una adecuada intervención tuitiva durante el proceso de identificación es posible llegar a ignorar la victimización por trata y confundir a la víctima de este fenómeno con aquella que lo ha sido por otros delitos comunes o que se ha visto relegada a meras situaciones de marginalidad.

Con todo, la identificación de las víctimas no es tarea fácil. Estudios previos han puesto de manifiesto cómo los profesionales que están en contacto con las víctimas carecen de la formación e información suficiente para la detección de las mismas, en particular cuando aquellas no han sido todavía sometidas a procesos de explotación o cuando, de haberlo sido, no en el ámbito de la prostitución sino en formas de explotación laboral, criminal o en otras modalidades menos conocidas. Asimismo, las propias víctimas son frecuentemente ajenas a su propia condición de tales, ya sea por la conciencia de haber aceptado la propuesta para emprender un proceso migratorio, haber confiado en la proposición para desarrollar una actividad laboral inicialmente atractiva y que se revela después fraudulenta o por haber sido sometida a tal abuso e intimidación que ha mermado la capacidad para analizar objetivamente las circunstancias vividas. No es pues de extrañar que en este contexto las víctimas lleguen a asumir de forma resignada su situación y a desconfiar de un sistema policial y judicial que, temen, no va a creerlas ni va a poder protegerlas a ellas y a sus familias.

Normativamente hablando, las víctimas de trata de seres humanos gozan de diversos instrumentos de protección en el marco del proceso penal. Incluso antes del inicio del proceso, según dispone el art. 59 bis LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a las víctimas de trata de seres humanos identificadas se les reconoce un período de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días durante el cual deben decidir si quieren colaborar con las autoridades en la

investigación del delito y en el procedimiento penal.² Durante dicho período, que es susceptible de ser prorrogado, se prevé que el Estado se haga cargo de la subsistencia de la víctima, garantizando su seguridad así como la de las personas que dependan de ella y excepcionalmente de algunos familiares que residan en España. Se dejan además en suspenso los expedientes por infracción de la normativa de extranjería que la víctima tenga pendientes y las órdenes de expulsión. Finalizado el mismo, la administración debe decidir si facilita el retorno asistido de la víctima o le concede autorización de residencia y trabajo. En este segundo caso, debe tenerse en cuenta que la normativa de extranjería contempla un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para las víctimas de trata de seres humanos, que de acuerdo con el art. 144 Reglamento extranjería se puede conceder tanto por razones humanitarias como por la colaboración con las administraciones públicas. Tiene una vigencia inferior a 5 años e implica la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial, sin perjuicio de que el extranjero pueda acceder a una situación de residencia de larga duración.

En el estricto marco procesal penal, hasta las reformas operadas tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento criminal en 2015 como mediante la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, las víctimas de la trata de seres humanos gozaban de las medidas de protección de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, todavía vigente. A través de la referida norma, junto a medidas como evitar que se hagan fotografías o se les tome su imagen por cualquier procedimiento, se contemplaba la posibilidad de que no constasen los datos de las personas objeto de protección en las diligencias, que su comparecencia se efectuase impidiendo la identificación visual normal o que constase la sede del juzgado a efectos de notificaciones y citaciones, lo que podía acordar la autoridad judicial mediante auto cuando apreciase un peligro grave para la persona, libertad o bienes del beneficiario, su cónyuge o persona con quien esté ligado por análoga relación de afectividad o los ascendientes, descendientes o hermanos. Esta disposición se considera obsoleta, no solo porque parifica en protección a testigos y peritos sin establecer un tratamiento especial para las víctimas, sino porque confunde dos realidades bien distintas, la de los testigos ocultos y los testigos anónimos, siendo la admisión de estos últimos más difícil de conciliar con los derechos procesales de los acusados, además de que obliga a desvelar la identidad de los protegidos si cualquiera de las partes solicita

² La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ha modificado el apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el sentido de extender el plazo del periodo de restablecimiento y reflexión a una duración de al menos noventa días.

motivadamente en su escrito de calificación provisional, acusación o defensa el conocimiento de la misma (FERREIRO BAAMONDE, 2005; MARTÍN RÍOS, 2012). Pese a ello, la declaración de un testigo anónimo, según la jurisprudencia del TC en base a lo establecido por el TEDH, puede admitirse como prueba de cargo cuando concurren tres requisitos (STC, Sala Primera, 75/2013, 8 de abril): 1. Que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial mediante resolución motivada; 2. Que los déficits de la defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y su testimonio y 3. Que la declaración del mismo concorra acompañada de otros elementos probatorios, de manera que no podrá por si sola o con un peso probatorio excesivo enervar el principio de presunción de inocencia.

Tras la realización de la presente investigación, las medidas de protección procesal de las víctimas de trata de seres humanos se han incrementado. De un lado, con la reforma del art. 57 CP mediante la LO 1/2015, incluyéndose la trata de seres humanos en el elenco de delitos que el precepto contiene, cabe acordar desde las primeras diligencias la adopción de las órdenes de alejamiento contempladas en el art. 544 bis Lecrim cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima. Dichas prohibiciones de aproximación, comunicación o limitaciones de residencia pueden imponerse además como sanciones en este delito atendiendo a la gravedad de los hechos y el peligro que el delincuente represente.

Junto a esta posibilidad, pese a que la Fiscalía General del Estado venía ya admitiendo la preconstitución de la testifical de la víctima mediante la grabación de la prestada en instrucción y su reproducción en el acto del juicio en los casos de trata, conforme se había propuesto desde un sector de la doctrina (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2011; VILLACAMPA, 2011), la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito ha supuesto la transposición a nuestro ordenamiento de los contenidos de la Directiva 2012/29/UE y, con ello, la consolidación de un estatus procesal especial para las víctimas del delito. Respecto de la protección de las víctimas, esta norma supera el *modus operandi* basado en la atribución apriorística de la condición de víctima especialmente vulnerable, adoptando un enfoque más dinámico que hace depender la condición de víctimas con necesidades especiales de protección según una evaluación individual a la que debe someterse toda víctima (TAMARIT, VILLACAMPA y SERRANO, 2015). Establece tres niveles de protección, el básico, que incluye medidas de protección aplicables a todas las víctimas, el reforzado -referido a las víctimas en las que se aprecien medidas especiales de protección- y el hiperreforzado -aplicable a los menores y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección-. En relación con las medidas de protección acordables respecto de cualquier víctima, se contemplan las de

evitar la victimización secundaria, evitar el contacto con el infractor en dependencias judiciales, ciertas medidas de protección en la fase de investigación (que se le tome declaración sin dilaciones injustificadas y el menor número de veces posible, pudiendo ir acompañadas del representante legal o de una persona de su elección), así como la protección de la intimidad de las víctimas (arts 19, 20, 21 y 22 Ley 4/2015).

Las víctimas del delito de trata de seres humanos, sin embargo, fácilmente alcanzarán la condición de víctimas con necesidades de protección especial, puesto que este delito se encuentra entre aquellos que el art. 23 Ley 4/2015 manifiesta que deben tenerse especialmente en cuenta a efectos de efectuar dicha declaración, y con ello alcanzar una mayor cota de protección procesal. En caso de que la víctima de trata alcance dicha consideración, pueden adoptarse para protegerla en el marco del proceso penal las medidas contempladas en el art. 25 Ley 4/2015. En concreto, en fase de investigación penal: toma de declaración en dependencias adecuadas, por profesionales formados o con su ayuda, por la misma persona cuando sea posible y por persona del mismo sexo que la víctima si ésta lo desea en delitos de violencia de género, sexual o en el marco de las relaciones personales. En la fase de procedimiento ante los tribunales, las medidas de protección que pueden acordarse consisten en evitar el contacto visual entre víctima y ofensor -empleando para ello medios adecuados, como la videoconferencia-, garantizar que la víctima sea oída sin estar presente en la sala de audiencia, evitar la formulación de preguntas innecesarias en relación con la vida privada de la víctima o acordar que la audiencia se lleve a cabo sin presencia de público. Cuando además la víctima de trata de seres humanos sea un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección (art. 26 Ley 4/2015) se prevé que en investigaciones penales su declaración sea grabada por medios audiovisuales, pudiendo ser utilizadas como medios de prueba, y pudiendo recibirse declaración, además, por medio de expertos. Se reconoce a estas víctimas el derecho a la asistencia letrada y representación legal en caso de conflicto de intereses con sus padres, así como que el Fiscal recabe la designación de un defensor judicial de la víctima cuando los representantes legales tienen con la víctima un conflicto de intereses, cuando dicho conflicto existe con un progenitor y el otro no está en condiciones de ejercer sus funciones o cuando la víctima no está acompañada o está separada de quien ejerza la patria potestad o la institución tutelar.

A lo que a la previsión normativa sobre asistencia a las víctimas se refiere, antes de la aprobación de la Ley 4/2015, la regulación quedaba limitada a lo previsto en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Siendo el principal cometido de esta ley el diseño de un programa de ayudas económicas para víctimas concretas, solamente el II capítulo de la

misma se dedicaba propiamente a la asistencia a las víctimas. Así, por un lado, el art. 15 venía a reconocer el derecho de aquellas a ser informada de las posibilidades de obtener la restitución y reparación por el daño sufrido en el marco del proceso penal, así como de la fecha y lugar de celebración del juicio y que le fuera notificada la resolución. Por otro lado, el art. 16 supuso la creación de las Oficinas de asistencia a las víctimas como servicio público y gratuito implantado en las sedes de juzgados y tribunales.

Con posterioridad a la realización de la investigación empírica que nutre este trabajo, la aprobación de la Ley 4/2015 ha previsto una mayor intervención de las OAV en la asistencia a las víctimas. En este sentido, el art. 28 de la Ley, en el que se recogen las funciones que se les atribuyen, contempla, entre otras, el apoyo emocional a la víctima, la coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima, así como la coordinación con Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal para la prestación de los servicios de apoyo a las víctimas. Se prevé pues, una importante labor de coordinación de estas entidades con, por un lado, los prestadores de asistencia social a las víctimas, y por otro lado, los profesionales del ámbito forense. Asimismo, en el apartado segundo del mismo precepto, la Ley encomienda a las OAVs la realización de una valoración de las circunstancias particulares de la víctima con la finalidad de determinar las medidas de asistencia y apoyo que deban serle prestadas, y entre las cuales, por ejemplo, el apoyo o asistencia psicológica, el acompañamiento a juicio, la información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de una víctima con necesidades especiales de protección y, finalmente, la derivación a servicios de apoyo especializado. Como veremos a lo largo del presente trabajo, se trata de un elenco de funciones mucho más extenso que el que vislumbramos en la realización de la investigación.

En el plano político se cuenta con diversas iniciativas tendentes a la protección de las víctimas de trata de seres humanos. En este sentido, el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2009-2011, y prorrogado hasta diciembre de 2012) ha sido recientemente renovado con la aprobación del Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018³. El nuevo Plan centra su atención en la trata que tiene por finalidad la explotación sexual de las víctimas, y en concreto, la prostitución. De nuevo, parecen obviarse otras formas de explotación a las que tan frecuentemente se destinada también a las víctimas de trata, como la laboral o la criminal, a la que empieza a dedicarse, también en el ámbito académico, interés creciente. El Plan adopta asimismo una singular perspectiva de

³ <http://www.msssi.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm>

género que, si bien parte de la evidencia de que la mayor parte de víctimas de la trata para la prostitución coactiva son mujeres, parece excusar las carencias existentes para reconocer, identificar y atender también a hombres y niños sometidos a esta y otras formas de explotación. En definitiva, el Plan reincide en la tónica de construir la idea de la trata entorno a una víctima ideal, lo que puede distorsionar la concepción compleja y global del fenómeno de la trata.

Por otro lado, en noviembre de 2011, atendiendo a las instrucciones contenidas en el Plan integral de 2009 y a lo dispuesto en el Reglamento de extranjería el Gobierno adoptó el Protocolo marco de protección a las víctimas de trata de seres humanos. Este documento tiene como objetivo establecer pautas de actuación para la detección, la identificación, la asistencia y la protección de aquellas, favoreciendo la coordinación de las instituciones implicadas y definiendo los mecanismos de relación entre administraciones competentes. El Protocolo dedica especial atención a la detección y la identificación de las víctimas de trata en general pero incluye también previsiones relativas a la información, las medidas de protección y seguridad, la derivación a los recursos asistenciales, las relaciones institucionales o la actuación de determinados profesionales forenses. De los principios generales de actuación contenidos en el Protocolo marco de 2011 se colige que las instituciones y administraciones con responsabilidad en la materia debe facilitar el acceso de todas las víctimas a los sistemas de asistencia y protección, sin que ello pueda condicionarse a su cooperación en la investigación del delito, asegurando la recuperación y rehabilitación física, psicológica y social de aquellas. En este sentido, establece el Protocolo la actuación de las unidades policiales quienes, tras evaluar los riesgos existentes, tienen encomendada la función de informar a la víctima de los posibles riesgos y de las medidas de protección y seguridad a adoptar, entre las que se contempla un teléfono de comunicación permanente con el personal encargado de la investigación y la información sobre medidas de autoprotección tales como su localización en un alojamiento seguro. El documento recoge también la obligación de informar a la víctima sobre los recursos asistenciales a su disposición pero no concreta a quien corresponde hacer efectiva esta función. Sí se especifica, en cambio, que los recursos deben garantizar a la víctima alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica, servicios de interpretación y asesoramiento jurídico. Finalmente, el protocolo prevé también que pueda derivarse a la víctima a las administraciones autonómicas o locales competentes en materia de asistencia social o a los servicios de las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas de trata.

La realización de un estudio sobre la asistencia a las víctimas de trata de seres humanos basado en entrevistas en profundidad con profesionales resulta sin duda novedoso. Se trata del primer trabajo que aborda esta cuestión empleando metodología cualitativa. Si bien en el contexto comparado se cuenta con investigaciones que han acudido a las entrevistas con profesionales para exponer los problemas vinculados a la asistencia a las víctimas de trata, la mayor parte de tales trabajos han incidido en cuestiones vinculadas a la identificación de las víctimas y menos en las intervenciones de carácter tuitivo. Podemos, no obstante, referirnos a la existencia de investigaciones que ponen de manifiesto la persistente atribución de aspectos clave de la asistencia y apoyo a las víctimas a agencias policiales y gubernamentales a pesar de la evidencia de una mejor capacitación de las agencias de servicios sociales para identificar la diversidad de experiencias de la trata, lo que revierte en un desequilibrio en los recursos humanos y económicos que reciben las ONGs y, por otra parte, agencias gubernamentales (KAYE, J., WINTERDYK, J. y QUARTERMAN, L., 2014). Otros trabajos centran el foco de atención en los procesos de trata que afectan a menores no acompañados, migrantes y refugiados, evidenciando cómo la falta de identificación de las víctimas afecta a su protección y asistencia (WARRIA ET AL., 2015) y, todavía cabe referenciar ciertas investigaciones que, si bien centran su interés en los mecanismos de detección de las víctimas, incluyen a los prestadores de apoyo a las víctimas en las entrevistas (FARRELL, 2014; FARRELL, PFEFFER 2014).

II. METODOLOGIA

Para la realización de esta investigación se empleó metodología cualitativa, puesto que se consideró que ésta respondía mejor a los objetivos de la investigación, al permitir en mayor grado que la metodología cuantitativa la colocación del observador en el mundo (DENZIN, N.K. y LINCOLN, Y.S., 2002; LINCOLN, Y.S, 2002) y posibilitar una aproximación más profunda a la realidad analizada (MARSHALL, C., ROSSMAN, G.B., 2006; MAY, K.A., 2005; CORBIN, J. y STRAUSS, A., 2008). Se empleó un sistema de muestreo intencional que partió de la posibilidad de que diversos profesionales en el ámbito del sistema de justicia penal o en el ámbito asistencial pudiesen eventualmente entrar en contacto con víctimas de trata para explotación criminal. La muestra estuvo finalmente integrada por 37 profesionales, de los cuales 28 actuaban única o preferentemente en el ámbito del sistema de justicia penal y 9 en el ámbito asistencial, con las características que se refieren en la Tabla 1. Se intentó infructuosamente que interviniesen agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados a centros de extranjería, así como integrantes de este cuerpo policial destinados al grupo especializado en trata de seres humanos, pues

no se obtuvo respuesta en sentido positivo a las sucesivas demandas de intervención cursadas en este sentido por las investigadoras.

Tabla 1. Relación de entrevistas realizadas

	Sexo	Antigüedad	Destino	Área geográfica	SJP* AA**	Especialista	TOTAL
Agentes Cuerpo Nacional Policía	hombre	17 años	UCRIF	Barcelona	SJP	sí	4
	hombre	25 años	UCRIF	Barcelona	SJP	sí	
	hombre	33 años	extranjería	Aeropuerto Barcelona	SJP	no	
	hombre	37 años	extranjería	Aeropuerto Barcelona	SJP	no	
Agentes Mossos Esquadra	hombre	20 años	Unidad central THB	Barcelona Catalunya	SJP	sí	5
	hombre	14 años	Unidad central THB	Barcelona Catalunya	SJP	sí	
	hombre	No consta	Jefe investigación	Lleida	SJP	no	
	hombre	No consta	Subinspector	Lleida	SJP	no	
	hombre	15 años	Jefe investigación	Barcelona	SJP	no	
Fiscales	hombre	6 años	Fiscalía extranjería	Barcelona	SJP	sí	6
	hombre	30 años	Fiscalía extranjería	Lleida	SJP	sí	
	hombre	No consta	Fiscalía provincial	Lleida	SJP	no	
	hombre	35 años	Fiscalía extranjería	Madrid	SJP	sí	
	mujer	27 años	Fiscalía extranjería	Madrid	SJP	sí	
	hombre	17 años	Fiscalía extranjería	Madrid	SJP	sí	
Jueces	mujer	15 años	Juez	Lleida	SJP	no	2
	hombre	17 años	Magistrado	Lleida	SJP	no	
Letrados	mujer	18 años	Letrada ONG	Lleida	SJP-AA	no	4
	mujer	15 años	Letrada ONG	Madrid	SJP-AA	sí	
	mujer	7 años	Letrada ONG	Barcelona	SJP-AA	sí	
	mujer	5 años	Letrada ONG	Barcelona	SJP-AA	sí	
Funcionarios Centros penitenciarios (CP)	mujer	25 años	CP Brians	Barcelona	SJP	no	7
	mujer	No consta	CP Brians	Barcelona	SJP	no	
	hombre	29 años	CP Brians	Barcelona	SJP	no	
	mujer	13 años	CP Ponent	Lleida	SJP	no	
	hombre	27 años	CP Ponent	Lleida	SJP	no	
	mujer	15 años	CP Tarragona	Tarragona	SJP	no	
	mujer	26 años	CP Tarragona	Tarragona	SJP	no	
Personal ONGs	mujer	18 años	Coordinadora	Barcelona	AA	si	5
	mujer	No consta	Coordinadora	Madrid	AA	si	

*Sistema de justicia penal; **Ámbito asistencial

La metodología para recoger datos consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad presenciales con una duración de entre 30 y 90 minutos. Se elaboraron dos modelos de entrevistas que constaban de diferentes aspectos que se pretendían abordar en función de que el entrevistado fuese un profesional activo en el sistema de justicia penal o en el ámbito asistencial. Los dos modelos de entrevistas tenían una parte común, relativa a indagar el grado de conocimiento tanto sobre el fenómeno de la trata como sobre las distintas manifestaciones de la misma y los instrumentos normativos existentes para proteger a las víctimas, así como sobre formación y coordinación y el sistema de asistencia a las

víctimas. Los modelos de entrevista fueron empleados como una guía, sin dictar la dinámica de la conversación con el entrevistado.

La intervención en la investigación fue voluntaria para los profesionales entrevistados, pese a que no se hizo firmar documento alguno de consentimiento informado para garantizar el anonimato. Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de febrero y junio de 2014 en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tarragona y Lleida; fueron grabadas y después completamente transcritas. Los datos se analizaron empleando la metodología del análisis temático (GUEST, G., MCQUEEN, K. M. y NAMEY, E.E., 2012) y siguiendo las fases de que ésta se compone: familiarización con los datos, generación de códigos iniciales, búsqueda y revisión de los temas, definición y asignación de nombres a los temas (BRAUN, V. y CLARKE, V., 2006).

III. RESULTADOS

1. Protección a las víctimas en el marco del proceso penal

Como se ha indicado en la introducción, las medidas de protección de las víctimas de la trata de seres humanos en el procedimiento penal se centran, una vez han sido identificadas, en primer lugar, en el reconocimiento de un período de restablecimiento y reflexión en que las víctimas deben decidir si colaboran con las autoridades en la investigación del delito, así como la posibilidad de acordar medidas de protección desde las primeras diligencias que no dependan de la intervención de la víctima como testigo en el proceso. En segundo lugar, cuando las víctimas intervienen en el procedimiento como testigos, se les pueden reconocer las medidas de protección de la LO 19/1994, de protección de testigos y peritos en causas criminales, que permite ocultar la identidad de la víctima. Junto a las medidas que contempla dicha norma en relación con la previsión de posibles testigos anónimos, cuanto menos en el momento en que esta investigación se llevó a cabo, en tercer lugar, otra opción no establecida de forma clara normativamente, pero impulsada por la Fiscalía General del Estado mediante la circular 5/2011, ha sido la preconstitución de la práctica de la prueba testifical. A cada una de estas tres cuestiones, pues, se dedicarán las siguientes páginas.

1.1. Reconocimiento del período de restablecimiento y reflexión y otras medidas de protección independientes de la intervención de la víctima como testigo en el proceso

En relación con las víctimas de trata de seres humanos que se hallan en situación irregular en nuestro país, pese a que el período de restablecimiento y reflexión se reconoce en el art. 59 bis LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su interacción social, y su importancia se reitera en el Protocolo marco de

protección de las víctimas de trata de seres humanos, no fueron pocos los profesionales entrevistados que manifestaron desconocer su contenido cuando se les preguntó específicamente por la cuestión. En concreto, de los 28 profesionales pertenecientes al sistema de justicia penal entrevistados, 8 reconocieron abiertamente no saber sobre qué se les preguntaba. El número de profesionales que desconocían el contenido asistencial del mismo, disminuía en el caso de los que prestaban asistencia, en que de los 9 entrevistados 2 manifestaron abiertamente desconocer sobre qué se les preguntaba.

Los profesionales del ámbito del sistema de justicia penal que conocían de la existencia de dicho período, sin embargo, manifestaron mayoritariamente desconocer cuál era el contenido asistencial concreto que se prestaba durante el mismo. Esto es, declararon que quienes se encargaban de prestar dicha asistencia eran las organizaciones no gubernamentales y que su misión se limitaba a ofrecer información acerca de la existencia de dicho período, derivando a dichas organizaciones, o a organismos policiales especializados, a quienes se acogían al mismo. Sirvan como muestra las siguientes manifestaciones:

(E1) “Las informamos y si ellas se acogen al 59 bis inmediatamente las ponemos en la misma noche -es por la noche donde más trabajo yo, claro, hay más prostitución por la noche- en manos de una ONG. (...) Creo que la asistencia es buena. (...) Tampoco puedo hablar en propiedad”.

(E 4) *(Respuesta a la pregunta de si conoce el tipo de asistencia prestado en período de restablecimiento y reflexión)* “Yo lo pongo en conocimiento de la UCRIF; la UCRIF vienen, se lo llevan y ya las gestiones que ellos hagan las desconozco”.

(E 5) “Entonces lo que hacemos es separarlas inmediatamente de los autores y trasladarlas a centros de asistencia. (...) La ONG hace estas entrevistas iniciales, de manera que lo que hacen es no entrar en el tema puramente criminal y entran en el tema asistencial. Entonces les ofrecen todas las posibilidades a que se pueden acoger. Las que se han acogido a este procedimiento, cuando ellas nos dicen que consideran que han superado esta fase inicial y ellas mismas abran la puerta al hecho de venir a la policía, entonces nosotros les hacemos una entrevista”.

En definitiva, la asistencia que se ofrece a las víctimas en comisaría se limita prácticamente a anunciarles la posibilidad de acogerse a dicho período de restablecimiento y reflexión, al que se nos indicó que pocas víctimas se acogían (E 01) y su derivación a la correspondiente ONG que puede prestar asistencia. Tanto es así que a preguntas de las entrevistadoras en relación con qué tipo de asistencia se prestaba a las víctimas de trata de seres humanos en dependencias policiales, los integrantes de cuerpos policiales especializados nos indicaron que les ofrecían información acerca de la existencia del 59 bis LO 4/2000 y las derivaban inmediatamente a la ONG que les iba a

prestar asistencia psicológica, mientras los agentes no especializados indicaron que de ello se encargaba el organismo policial especializado. La derivación de las víctimas a ONG es, pues, tónica habitual en el abordaje policial de este tipo de victimización.

El desconocimiento acerca del tipo de asistencia que se presta a las víctimas por parte de los profesionales en el ámbito del sistema de justicia penal y sus manifestaciones en relación con que son las organizaciones no gubernamentales especializadas las que se dedican a prestarla, es algo que no se limita a los agentes de policía, sino que puede observarse también en otros colectivos de profesionales activos en el sistema. Por ejemplo, un integrante del Ministerio Fiscal nos decía:

(E 14) “Tenemos conocimiento porque el Protocolo marco dice que lo tengamos, que el Fiscal de extranjería lo tenga cuando se acuerde, pero a efectos del proceso penal da un poco igual. (...)De acuerdo con la norma del Protocolo marco, Fiscalía tiene que estar informada. Otra cosa es que como Fiscal en la causa penal frente al juzgado de instrucción tenga que tener más o menos en cuenta el período de restablecimiento y reflexión. (...) En España la protección está en manos de ONG”.

En tono más crítico, una letrada, lamentándose de la ausencia de información con que operaba, nos decía:

(E 18) “(...) Si la policía puede detectar a una posible víctima de trata, lo único que disponen son de organizaciones no gubernamentales, que yo no sé quiénes son, que aparecen por allí y no hay una mínima comunicación entre el que ha de asistir a la víctima, es decir, en este caso el abogado y la organización, que es lo que me pasó a mí, yo no sabía ni con quien estaba hablando, de hecho intenté echarlos de allí porque pensé que me estaban distorsionando la declaración. (...) Yo la vez que he tenido cuatro víctimas de trata me enteré cuando ya se las habían llevado y no me facilitaron ni sus teléfonos, no pude comunicarme con ellas, me quedé con las autorizaciones de residencia yo en mi despacho. (...) Yo como defensor de ellas recibí todas las notificaciones, con lo cual di por hecho que es que ni la policía sabía dónde las había enviado”.

Una diferencia que se ha objetivado entre organismos policiales especializados pertenecientes a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, es que mientras los primeros vinculan la asistencia en dependencias policiales básicamente con lo dispuesto en relación con el período de restablecimiento y reflexión en normativa de extranjería, los segundos conceptúan de forma más comprensiva la asistencia prestada a las víctimas en dependencias policiales, no tan centrada en víctimas de trata que tengan la condición de residentes ilegales. En concreto, como se deriva de las palabras que a continuación se reproducen, aplican un sistema de protección que identifican como REST y valoran el riesgo de la víctima, acordando medidas de protección en función del nivel de riesgo que

la víctima soporta, de forma muy semejante a como se hace en los supuestos de violencia de género.

(E 6) “Nosotros aplicamos lo que denominamos “rest system”, que es relax, eat, sleep and testify. Primero la víctima separada, que tenga un techo, que duerma, que coma, que descanse, que se sienta segura y una vez la víctima esté en condiciones, esté bien, esté asistida, tal y cual, después ya vendremos nosotros a tomarle declaración. (...) Tenemos protocolizado lo que son los indicadores de riesgo para determina el nivel de seguridad que se le tiene que aplicar a la víctima y tenemos tres niveles de seguridad: bajo, mínimo y alto, con implicaciones diversas. (...) Si es un nivel bajo, porque digamos que su situación ya ha cesado porque ella ya se ha presentado en comisaría y no tiene ningún riesgo, pues haremos un seguimiento del caso y punto. Si es un nivel alto, se la deriva a una casa de acogida, se la preserva y nosotros hacemos un seguimiento las 24 h. por teléfono”.

Ciertamente, según el Protocolo marco de protección a las víctimas de trata de seres humanos, la referencia al período de restablecimiento y reflexión se contempla como aspecto a considerar en los supuestos en que se esté lidiando con víctimas en situación irregular en nuestro país, mientras en los demás supuestos prevé que deben adoptarse medidas de protección y seguridad de la víctima de acuerdo con la evaluación de los riesgos existentes que se hayan apreciado. Según dispone el apartado VIII.2 del Protocolo, las medidas de protección y seguridad podrán consistir en facilitar un teléfono de comunicación permanente con el personal encargado de la investigación, informar a la víctima sobre medidas de autoprotección -incluida la necesidad de que permanezca en un alojamiento seguro o de su traslado a otra Comunidad Autónoma-, así como sobre la conveniencia de que comunique cualquier cambio de domicilio y cualesquiera otras que se consideren adecuadas a su situación de riesgo. Pese a ser este el contenido del protocolo y pese a que tras la reforma operada en 2015 en el art. 57 CP cabe que las medidas de alejamiento de la víctima se acuerden también para quienes lo son de un delito de trata de seres humanos, parece que la vinculación normativa que se ha establecido siempre entre trata y extranjería, incluso en lo que a protección de las víctimas se refiere, pesa en algunos operadores jurídicos. Éstos sitúan como aspecto central de la protección de las víctimas la paralización de los expedientes de regularización de estancia, cuando el concepto de protección debería ser más comprensivo. Resulta así revelador que el reconocimiento legal del período de restablecimiento y reflexión se limite precisamente a las víctimas que están en España en situación administrativa ilegal y que no se plantee que víctimas que no estén en esa situación necesiten igualmente de un período en el que restablecerse y decidir cómo actuar, asumiéndose de manera incontestada esta inadecuada situación normativa, como se deduce de las siguientes palabras

(E 14) “Puede ser el caso que una víctima no tenga período de restablecimiento y reflexión ninguno; ¿por qué?, porque es española. ¿Por qué le vas a dar período de restablecimiento y reflexión si es una víctima española o una víctima comunitaria?. O sea, quiero decir que la protección contra la deportación no afecta a una española ni a una comunitaria. La protección contra la deportación afecta a los terceros estados. Entonces, si tú tienes una víctima que no tienes que proteger frente a la expulsión, la forma de tratarla es distinta, porque el expediente administrativo no existe, no hay expediente administrativo”.

Y es que parece lógico que toda víctima de trata, con independencia de la legalidad de su residencia, debería poder gozar de un período en el que recapacitar acerca de la situación vivida y decidir cómo actuar. Tanto es así que una de las profesionales activas en el ámbito asistencial, que desconocía la previsión normativa del período de restablecimiento y reflexión, manifestó que consideraba “absurda” su previsión normativa específica, al entender que la protección a la víctima debía producirse desde el primer minuto, con independencia del reconocimiento de tal período.

Con todo, la vinculación de la tutela de la protección de la víctima con la situación de extranjería se evidencia en las referencias que algunos de los entrevistados efectuaron al asilo como alternativa de protección a las víctimas de trata, en particular por parte de los agentes que actuaban en fronteras. Si bien la referencia a la necesidad de conceder más solicitudes de asilo a víctimas de trata se defendió desde el ámbito asistencial apelando a que se estaba trabajando por que el haber padecido trata pudiera considerarse causa de persecución en el país de origen a efectos de conceder asilo -lo mismo que antes se había conseguido que tuviese esa consideración el ser homosexual o padecer violencia de género como motivos de persecución en los países de origen-, en el ámbito policial se apeló a que la solicitud de asilo se producía en última instancia, para evitar la devolución en frontera:

(E 3) “Cuando las detectan, normalmente las detectan en frontera, se les deniega la entrada en principio. Posteriormente, cuando ven que ya las van a echar o en el último día ya están a punto de echarlas, solicitan asilo”.

Pese a que, al menos para determinados operadores jurídicos, que se conceda a la víctima un período para superar la situación vivida y decidir si se quiere colaborar con la administración de justicia se vincula únicamente al período de restablecimiento y reflexión que se reconoce a las víctimas de trata en situación irregular en España, en el ámbito policial dicho período se considera un inconveniente. Esto es, de las entrevistas efectuadas a algunos agentes actuantes se deduce que consideran que la necesidad de respetar ese tiempo de espera para poder hablar con la víctima puede constituir un

obstáculo para que la investigación policial avance. Así se deduce, por ejemplo, de las siguientes entrevistas:

(E 6) “Si tiene un expediente incoado, pues sigue su curso, porque el período de restablecimiento y reflexión es como un paréntesis, pero si cierras el paréntesis, continuas. (...) El mayor número de víctimas que nosotros identificamos, ya las tenemos identificadas, porque vienen fruto de una investigación. Yo cuando acabo el caso ya sé quién son las víctimas, porque a lo largo de la investigación ya me han salido, ya sé dónde están y, por tanto, no necesito hacer ninguna gestión para saber si lo que dice ella es verdad. Es un período que se ofrece porque la ley obliga”.

(E 7) “Desde el punto de vista policial no me puedo someter a esto (*en referencia al período de restablecimiento y reflexión*). Pongamos que viene una chica y denuncia esto, ¿qué tengo que hacer yo como investigador policial: esperar a que ella tenga un período de reflexión sobre su situación y sobre si quiere continuar con el procedimiento, la denuncia y demás?; no, yo actúo con immediatez. La estrategia policial la tengo que llevar a cabo ya; no sé si hay otras chicas en situación de riesgo, no puedo quedarme de brazos cruzados, esperando (...)”.

(E 8) “Por un lado es bueno que tengan este período para que puedan asimilar realmente pues todo lo que se les explica y cuáles serán las consecuencias de cada uno de sus actos y de cada uno de sus pasos (...). Pero a veces también hay una crítica de que está demasiado dilatado en el tiempo, con lo cual una cosa es un período de reflexión y otra es un período tan largo que al final tampoco es bueno porque tampoco necesitas tanto y si al final tus condiciones son las correctas acabas por no denunciar”.

De hecho, la lógica policial y la de algunos operadores jurídicos parece concebir el reconocimiento de la condición de víctima y del propio período de restablecimiento y reflexión como una suerte de contraprestación a la voluntad de la víctima de colaborar con la administración de justicia, como muestran estas palabras:

(E 2) “Cuando está en período de restablecimiento y reflexión, si continúa colaborando tiene una serie de beneficios, entre ellos pues la propia tarjeta de residencia”.

(E 16) “Darles información del derecho que tienen en el caso de que colaboren a no ser expulsados, bueno, o al menos que les den un período de reflexión, que creo que son 30 días, durante el cual no se les tramite el expediente de expulsión por si quieren colaborar”.

Tanto es así que una integrante de una ONG especializada en la asistencia a víctimas de trata nos decía:

(E 29) “En todo caso hay un problema de planteamiento, de decir desde los cuerpos policiales cómo ven a esa persona, si como víctima o como delincuente. Porque si no, claro, con esto tenemos un problema, porque se puede utilizar incluso el tema de identificar a una víctima como una contraprestación. (...). Lo que no podemos es jugar a esto, de en función

de la información te doy o no te doy”.

Tal lógica resulta coherente con una visión instrumental de la víctima, a la que se considera más fuente de información que sujeto de derechos. De ahí, por ejemplo, que podía inferirse de las palabras de algunos profesionales del sistema de justicia penal que entendiesen la protección como mecanismo que les permitía obtener información para la investigación policial o judicial del delito de trata:

(E 1) “(*En respuesta a la cuestión de si informan del 59 bis y de la protección en el procedimiento penal*) Exactamente, porque hay que intentar tomar declaración y sacar lo máximo posible a nivel policial, que luego a lo mejor...”.

(E 4) “Nosotros por regla general lo que hacemos son las inadmisiones. O sea, llegan, si se inadmiten y se mandan otra vez al lugar de origen, si podemos sacar información la sacamos y queda reflejada. Que no, vuelven al lugar de origen”.

(E 7) “Hay unos compañeros que se dedican a atender, los grupos de atención a la víctima, es una cuestión interna policial, y después estamos los investigadores. A los investigadores tampoco nos veas como personas sin alma o algo por el estilo. Intentamos empatizar con la víctima para que tenga confianza en nosotros y nos explique todo lo que hay, y en muchas ocasiones es sacar información que ella en un primer momento no ha dado”.

Dado que para algunos profesionales del sistema de justicia penal la protección de las víctimas constituye un medio para que éstas colaboren con la administración de justicia facilitando información acerca de los tratantes, en caso de no colaborar, la idea que planea es que debe producirse la expulsión, por mucho que normativamente la Ley de extranjería prevea la posibilidad de conceder un permiso de residencia por razones humanitarias, y no solo en razón de la colaboración de la víctima en la investigación. Así se deduce de la siguiente entrevista:

(E 6) “Si la víctima quiere declarar, le tomamos declaración. Si no quiere declarar, pues se retrotrae a la situación anterior. Si es una víctima, por mucho que sea víctima, que me explique; si no quiere colaborar, no quiere denunciar, no quiere nada, yo poca cosa puedo hacer. Si es expulsable, se expulsaría. (...) Cuando acaba el período de restablecimiento y reflexión: ¿declaro?, pues yo te regularizo; ¿no declaro? ¿hay expediente de expulsión?, pues fuera”.

1.2. Medidas de protección a la víctima que actúa como testigo

Precisamente porque el testimonio de la víctima constituye una de las fundamentales, si no la única, fuente de prueba en los procedimientos penales incoados por el delito de

trata de seres humanos, una vez que la víctima decide colaborar con la administración de justicia actuando como testigo su protección en el ámbito procesal resulta capital.

Algunos profesionales son críticos con que la carga de la prueba resida fundamentalmente en las declaraciones testificales de las víctimas, quienes a menudo están amedrentadas por los traficantes. Por ello se ensaya la aportación de otros tipos de prueba que contribuyan a sentar la valoración judicial junto a la declaración de las víctimas. Las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a las víctimas no acostumbran, salvo en algún caso aislado, a presentarse como acusación particular en las causas por trata de seres humanos incoadas a raíz de la victimización de personas que están asistiendo, pero sí suelen acudir a juicio, bien prestando testimonios de referencia, bien efectuando informes psicosociales que contribuyen a probar la realidad de la trata -lo mismo que las OAV en el caso de los informes- como se observa en las siguientes entrevistas:

(E 30) “Nuestra acusación particular es muy puntual en determinados casos; no nos podemos personar en cada uno, pero sí que intentamos hacer seguimiento en la medida de las posibilidades de todos los procesos penales de las mujeres con las que intervenimos. (...) Creo que ha avanzado muy bien la coordinación entre policía, fiscalía de extranjería y las ONG que estamos prestando apoyo; se están aportando de nuestra parte informes sociales, informes psicológicos de la evolución de la mujer, de los indicios de la trata, del impacto del delito sobre la víctima...”.

(E 32) “Nosotros conectamos con fiscalía para garantizar los derechos de la víctima, no como acusación; es decir, nosotros no tenemos abogados que vayan de parte de ella, pero en lo que sí se está trabajando muchísimo con fiscalía es en la declaración de las mujeres, en basar todo el proceso en la declaración de la mujer. Nosotros estamos intentando ser nosotras como testigos quienes verifiquemos todo el proceso de esa mujer. (...). Y también como profesionales el informe psicosocial que hacemos se aporta como prueba en el juicio”.

Incluso los operadores jurídicos son conscientes de la importancia de estos testimonios. Acerca de dicho convencimiento, resultan ilustrativas estas afirmaciones:

(E 13) “Tenemos varias sentencias condenatorias donde es fundamental luego el testimonio del asistente social, de la psicóloga o de la propia organización, que las llevamos a juicio, como testigos o como peritos o la doble condición. ¿Por qué?, porque tenemos que vencer la gran dificultad que es que las chicas se retractan. Se retractan por miedo, amenazas posteriores, etc., o lo que es peor, por seducción. Y (...) luego la prueba de testimonios de referencia también es importante: la policía cómo localizan, los que realizaron la primera declaración, los que transmiten la situación de estrés, de desconcierto, los trastornos disociativos que son muy comunes en estas chicas...”.

Pese a que de cada vez son más los operadores jurídicos que insisten en la necesidad de que la prueba para obtener condenas en delitos de trata de personas no puede basarse únicamente en testificales, sino que debería fundamentarse en una adecuada investigación patrimonial de los traficantes, por el momento son las declaraciones de las víctimas y, eventualmente, las de quienes les prestan asistencia, las pruebas que vienen siendo fundamentales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los riesgos para los testigos son evidentes. Si se trata de las propias víctimas, porque, además de amedrentarlas, las tretas de los traficantes pueden incluso llegar a ponerles un abogado, y si se trata de las cooperantes, porque su integridad puede llegar a verse amenazada por los traficantes. Así se deduce de estos pasajes de las entrevistas:

(E 20) “Las asisten (*a las víctimas de trata*) abogados de oficio, a menos que la misma red les ponga un abogado de pago de confianza de la red, lo que sería todavía más perjudicial”.

(E 32) “Para nosotros que una mediadora vaya a un juicio y se la identifique cuando se va a encontrar con los tratantes en la calle no es una buena práctica, porque estamos poniendo en riesgo a esas mujeres. Entonces preferimos ser los profesionales que estamos interviniendo integralmente y desde los centros los que vamos a declarar, los que damos la cara porque no somos identificables; yo no voy a la calle ni nadie va a decir: pues esta es la que viene todos los días a tal hora”.

Puesto que la prueba testifical que las víctimas aportan todavía constituye el principal elemento para conformar el acervo probatorio en los procesos por delitos de trata de seres humanos, la consideración de las víctimas como testigos protegidos, de conformidad con lo establecido en la LO 19/1994, es un recurso al que habitualmente se refieren los profesionales del ámbito del sistema de justicia penal, lo mismo que los del ámbito asistencial. La referencia explícita a la condición de testigo protegido de las víctimas cuando se preguntó a los profesionales por las medidas de protección de las mismas en el marco del procedimiento penal afloró en 11 de las 21 entrevistas realizadas a agentes de policía, fiscales, jueces y letrados, así como en 3 de las 4 entrevistas realizadas a profesionales activos en OAV. De las entrevistas efectuadas a profesionales del ámbito del sistema de justicia penal se deduce como la consideración de testigo protegido de las víctimas de trata resulta prácticamente automática; se les informa ya de dicha posibilidad en comisaría por parte de los agentes especializados actuantes y se efectúa inmediatamente solicitud para que dicte el correspondiente auto al Juez Instructor, especialmente en los supuestos en que se aprecia que el riesgo que tiene la víctima de padecer algún atentado por parte de los tratantes es elevado.

Si bien, como después se expondrá, algunos profesionales del ámbito del sistema de justicia penal eran críticos con esta regulación y las posibilidades de protección que

ofrecía, no lo fueron tanto con la forma que tenían como colectivo profesional de abordar la tutela judicial de las víctimas, con la excepción de algunos integrantes del Ministerio Fiscal. Sin embargo, dicha implícita visión mayoritariamente positiva que los profesionales del sistema de justicia penal tenían en relación con la forma en que actuaban con la víctima-testigo no era compartida por los profesionales del ámbito asistencial, ni siquiera por los letrados de ONG, como demuestran los siguientes extractos de entrevistas:

(E 17) “Las que hemos tenido posibles víctimas, el trato ha sido no tratarlas como víctimas, sino como meros testigos, con lo cual, pues, el trato de Fiscalía no es que sea el más adecuado”.

(E 34) “A veces nosotros nos hemos encontrado que el sistema judicial o los policías quitan importancia al sentimiento de miedo de la mujer cuando va a declarar (...). A mí me pone la piel de gallina que se relativicen estas cosas (*en referencia a un caso en que un familiar de la víctima fue asesinado como represalia por la declaración de la mujer*) (...). El sistema penal se enfoca hacia el infractor y a la víctima se la utiliza como prueba, se pone el peso de la prueba en la víctima. Necesito este testigo para condenar a este; la víctima ya se apañará; bueno, sí, ya se le dará algún teléfono, ya...”.

(E 35) “Creo que todos confiamos en el sistema, también las víctimas, pero a veces les digo que estoy plenamente convencido de que la justicia es injusta”.

Como se ha indicado, entre las medidas de protección que contempla la LO 19/1994, se halla, además de la posibilidad de evitar la toma de imágenes de los testigos o la posibilidad de establecer la sede del tribunal a efectos de notificaciones, que el testigo concurra impidiendo su identificación visual normal -esto es, que actúe como testigo oculto- o que su identidad no sea conocida -es decir, que actúe como testigo anónimo-. De ambas posibilidades, la más admitida es la de la actuación como testigo oculto, no solo porque generalmente resulta más habitual el uso de mamparas u otros obstáculos físicos que impiden la identificación visual normal, como se deduce de las entrevistas, sino porque los tratantes deducen la identidad de la víctima aunque ésta formalmente no se haya desvelado, como se deduce de las palabras de uno de los entrevistados:

(E 17) “Más que un testigo anónimo era un testigo oculto. La protección en el momento del juicio, al menos, fue meramente formal; es decir, se hizo por videoconferencia, la cámara no les apuntaba, pero era un testigo anónimo, no oculto, porque ellos sabían quién era”.

Medidas como ofrecer una identidad supuesta a la víctima, pese a hallarse previstas en la norma, no se adoptan en casos de trata, como nos indicaba uno de los fiscales entrevistados:

(E 14) “Se prevé en la Ley de protección de testigos la medida de dar una identidad supuesta; hasta donde yo sé en España no se ha hecho nunca, por lo menos en trata, no sé si en terrorismo, en que está más evolucionado el tema, se ha hecho”.

Sin embargo, otras medidas no específicamente previstas en la ley, como hacer acompañamientos de víctimas al juzgado para que se sintiesen reconfortadas, sí se estaban aplicando en la práctica. Hasta el punto de que la tarea básica de las OAV en relación con la protección y asistencia a las víctimas de este tipo de delitos, toda vez que se constata que la asistencia social, psicológica e incluso jurídica corre a cargo de ONGs, se ha limitado prácticamente a realizar estas tareas de acompañamiento -que también realizan las referidas ONGs-, así como a garantizar que la identidad de los testigos no sea conocida cuando se ha acordado no facilitarla. Al respecto, desde la aprobación de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que se ha producido con carácter posterior a la realización de esta investigación, sí se contempla como una de las medidas a adoptar integradas en el umbral básico de protección a las víctimas la posibilidad de que cualquiera de ellas concurra a declarar acompañada del representante legal o de una persona de su elección.

Sin embargo, los profesionales entrevistados, tanto en el ámbito del sistema de justicia penal como en el asistencial, son críticos con los contenidos de la LO 19/1994. Tanto es así, que en tono muy crítico, alguno de los entrevistados empleó para referirse a este tipo de testigos la expresión “testigos pseudoprotegidos”, calificando el sistema de protección como de “cutre”:

(E 34) “Son testigos “pseudoprotegidos”, que te dicen que están protegidos cuando no lo están y a veces no tienen la categoría jurídica de testigo protegido. Te lo dice el Juez, el Fiscal o el Secretario Judicial y después tú ves que no hay protección de ningún tipo, que incluso sus datos están en el expediente judicial. (...) Yo lo que me he encontrado en los pocos casos de testigos protegidos en trata es cutrerío. La definición es “cutre”. A todos los niveles, cutre a nivel de derechos, con papeles mal hechos y deprisa y corriendo, con chantajes, engaños. En plan, bueno, no sé, haremos un sistema de vídeo cerrado, con vídeos sin distorsionar, y tú le estás diciendo a esa persona que no la reconocerán y es mentira”.

Más allá de las deficiencias generales del sistema o de la ausencia de sensibilidad de algunos profesionales del sistema de justicia penal denunciado desde el ámbito asistencial, los profesionales forenses denuncian que la LO 19/1994 se ha quedado obsoleta y debería modificarse. En concreto, la circunstancia que preocupa enormemente tanto a la policía especializada como a integrantes del Ministerio Fiscal como a los letrados de ONG es que, pese a que la identidad de la víctima pueda permanecer oculta durante la instrucción, el Juez debe desvelarla a petición de

cualquiera de las partes una vez abierto el juicio oral. Se considera que esta posibilidad coloca a la víctima-testigo en situación de absoluta vulnerabilidad, como se deduce de los siguientes extractos de entrevistas:

(E 2) “Intentamos que la víctima declare como testigo protegido y luego a la hora del juicio oral, claro, nos encontramos con muchos problemas; nos hemos encontrado con problemas en los que la insistencia de algunos abogados han impedido que en un juicio oral incluso se coloque un triste biombo entre la víctima y el explotador. (...) Tú la tratas como testigo protegido y luego resulta que el día que se celebra el juicio oral lo cuenta delante del propio explotador. (...) La declaración de la víctima no debería hacerse el mismo día que la del tratante”.

(E 5) “Se otorga la condición de testigo protegido absolutamente a todas las víctimas. Los jueces nos validan siempre la solicitud, la verdad. I así intentamos preservar la identidad de la víctima, hasta dónde podemos. En algunos casos se llega hasta el final sin revelar la identidad, en otros no, dependiendo del juez sí se revela. Y aquí tenemos una desgracia. Yo soy el primero que les dice que no vuelvan, que no vayan al juicio porque no saldrán”.

(E 14) “Lo que pasa es que llegado el juicio oral la defensa puede pedir que se le diga la identidad, que se desvele la identidad de la víctima. Esto está previsto creo que en el art. 11 LO 19/1994 y ha ocurrido”.

1.3. Preconstitución de la testifical

Quizá por la inseguridad que genera, respecto de la salvaguarda de la integridad de las víctimas, que de acuerdo con la LO 19/1994 su identidad, de mantenerse oculta, pueda desvelarse en juicio a petición de cualquiera de las partes, el colectivo profesional forense que aparece en esta investigación como más sensibilizado con la necesidad de protección de las víctimas articula dicha protección en el proceso mediante la preconstitución de la testifical en instrucción.

La posibilidad de anticipar la práctica de la prueba testifical, validando la prestada en instrucción con todas las garantías, que fuera grabada y reproducida en el acto de juicio oral para introducirla en el debate en el plenario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 730 Lecrim fue apuntada inicialmente por la doctrina para las testificales prestadas por menores de edad, con apoyo en la dispuesto en la Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, en relación con la cual admitió la aplicación del principio de interpretación conforme la STJCE, Gran Sala, de 16 de junio de 2015 (caso Pupino). Se apeló a que, más allá de la imposibilidad física de acudir al acto del juicio para la práctica anticipada de dichas declaraciones, el “otro motivo” a que se referían los arts. 777.2 y 797.2 Lecrim de acudir al acto del juicio podía

aludir a los perjuicios psicológicos que acudir a declarar al acto del juicio podría acarrear a los menores (VILLACAMPA ESTIARTE, 2005; NAVARRO VILLANUEVA, 2009). También la jurisprudencia ha asumido dicha posibilidad, de manera que incluso el TC se ha pronunciado sobre el particular indicando los requisitos que debían cumplirse para admitir como prueba de cargo la declaración prestada en instrucción por el menor (STC 174/2011, de 7 de noviembre; ALCÁCER GUIRAO, 2013), que había sido claramente impulsada por la Fiscalía General del Estado mediante la circular 3/2009.

Efectuado la correspondiente traslación del argumento empleado con los menores a las víctimas de trata, apelando a la imposibilidad psicológica que las víctimas de este tipo de delitos podrían padecer para acudir al acto del juicio, se planteó también en relación con este delito la práctica de las testificales en instrucción que, garantizando la existencia de contradicción, una vez grabadas, pudieran ser reproducidas en el acto del juicio (VILLACAMPA ESTIARTE, 2011). Nuevamente, la Fiscalía General del Estado asumió dicha posibilidad mediante la Circular 5/2011.

Tal posicionamiento claro de la Fiscalía General del Estado sobre el particular hace que 4 de los 6 representantes del Ministerio Fiscal que intervinieron en esta investigación, y solo ellos, se refieran a la preconstitución de la prueba testifical como un relevante instrumento para la protección procesal de las víctimas del delito de trata. Tanto es así, que uno de los entrevistados nos decía:

(E 13) “Nosotros lo que procuramos hacer es desde el principio blindar la prueba preconstituida, es lo fundamental. (...) La prueba preconstituida es la madre del cordero, así dicho en román paladino, es lo más importante. Y luego la prueba de testimonios de referencia”.

Se deducía además de los testimonios de los integrantes del Ministerio Fiscal que la preconstitución de la testifical la defendían para cualquier víctima de trata de seres humanos, no solo las menores de edad, como ilustran estas palabras:

(E 15) “Siempre se intenta preconstituir prueba. También con víctimas adultas”.

Ciertamente, la posibilidad de que las víctimas de trata declararan únicamente en instrucción, incluso a través de videoconferencia, registrándose su declaración y reproduciéndose en el acto del juicio, podría resultar una forma óptima de protegerlas en el proceso penal, salvaguardando el bienestar psicológico que pueda haberles aportado el período de restablecimiento y reflexión y reduciendo los posibles ataques a su integridad procedentes de los tratantes. Sin embargo, que esta no es una opción con que se cuente habitualmente en el marco del sistema de justicia penal lo demuestra que se refieran a la misma únicamente algunos integrantes del Ministerio Público -no todos los entrevistados pertenecientes al mismo-, pero que no la mencionen ni agentes de policía

especializados, ni jueces, ni letrados activos en ONGs que prestan labores de asistencia para con víctimas, ni siquiera personal asistencial de dichas ONGs o plantilla de las OAVs. Junto al desconocimiento generalizado de esta posibilidad entre los profesionales entrevistados, debe mencionarse que normativamente no existe una regulación de la prueba testifical prestada por adultos que favorezca un entendimiento generoso de la posibilidad de anticipar la práctica de testificales con base en las consecuencias adversas que acudir al acto del juicio pueda provocar en las víctimas, con lo que admitir o no dicha posibilidad depende de la voluntad de los tribunales. Ello explica que, pese a que quienes se refirieran a esta posibilidad en esta investigación se mostraron optimistas en el sentido de que había órganos judiciales, incluso el Tribunal Supremo, que había admitido dicha opción, también lamentaron que en algunos casos se había sido excesivamente riguroso para no admitir la validez probatoria de declaraciones de víctimas prestadas en instrucción, como se deduce de estas palabras:

(E 15) “Es una sentencia bastante motivada pero que acude a unos argumentos procesales un poco encorsetados, formales, que yo dudo que fueran aceptables. Aquí el tribunal reconoce que la prueba preconstituida se hizo correctamente porque los rumanos, las víctimas del supuesto de mendicidad, iban a volver a su país, tenían además un niño pequeño allí y habían manifestado su voluntad de volver. Bien, pero hay un elemento formal que el tribunal entiende que se ha violado y entonces anula esa declaración que se obtiene en la prueba preconstituida, porque hay que citar al testigo para que vaya a juicio y dice que el secretario no les requirió para que dieran un domicilio en que poder citarlos posteriormente. Bueno, a mi eso me suena en primer lugar a defecto procesal de lo más subsanable, además la defensa tendría que haber consignado protesta y no lo hizo, lo aceptó”.

Es más, con carácter posterior a dicha investigación, como se ha dicho, se aprobó la Ley del Estatuto de la Víctima, en la que si bien, en sintonía con lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE, se admite la grabación de la testifical prestada en instrucción por víctimas menores de edad, no se contempla dicha posibilidad para las víctimas mayores de edad, ni siquiera aquellas a las que se les reconozcan necesidades especiales de protección. De ahí que quepa vaticinar la estrecha admisibilidad de la preconstitución de testificales en los supuestos de víctimas adultas a los estrictos márgenes de la imposibilidad material de acudir al acto del juicio, bien por la muerte, por la imposible localización y, en algunos supuestos, por la residencia en el extranjero de la víctima.

2. Protección y asistencia a las víctimas de la trata

Dado que uno de los objetivos de esta investigación era analizar el grado de protección que en el plano personal y social se dispensa a las víctimas de trata de seres

humanos se plantearon en las entrevistas a profesionales una serie de cuestiones enderezadas a determinar los recursos y procedimientos con que los profesionales de cada ámbito cuentan para esta intervención. Esto permitió hacer aflorar también, al hilo de la conversación, reflexiones sobre los déficits y dificultades existentes así como propuestas para mejorar la prestación de tales servicios.

Comenzando por el colectivo de agentes y profesionales del ámbito forense es importante señalar que la intervención tuitiva de estos profesionales se centra en la protección de los derechos de la víctima en el marco del proceso penal, y por ello, ha sido ya objeto de especial desarrollo en el anterior epígrafe. Es cierto, no obstante, que los agentes policiales tienen encomendada en el Protocolo marco una función de información a las víctimas respecto de las medidas de protección necesarias atendiendo a su situación de riesgo, así como respecto de la posibilidad de ser derivadas a los recursos asistenciales facilitados por las administraciones o por organizaciones y entidades con experiencia acreditada. Este ha sido mayoritariamente el proceder observado en el conjunto de los agentes policiales entrevistados, quienes, como ya se ha comentado anteriormente, contactan con entidades prestadoras de servicios asistenciales para que se ocupen de esta función. De hecho, preguntados sobre el conocimiento de que disponen sobre la asistencia a las víctimas, la mayor parte de los agentes se limitaron a reconocer que desconocen el tipo de asistencia que reciben las víctimas puesto que se trata de una cuestión que se halla confiada a otras instituciones.

En definitiva, aun cuando el Protocolo Marco contempla para las víctimas una asistencia de carácter multidisciplinar, prestada por agentes con formación adecuada y en la que se prevé también la participación de organizaciones de la sociedad civil, son precisamente estas últimas las que asumen, en elevado grado y casi en solitario, como a continuación veremos, la asistencia a las víctimas. Para el análisis de esta cuestión nos referiremos, en primer lugar, al tipo de asistencia que las entidades ofrecen a las víctimas y las principales directrices que inspiran esta labor. En segundo lugar nos referiremos a las dificultades con las que las entidades topan en el desarrollo de su tarea y finalizaremos mencionando los retos y propuestas para una mejor intervención.

2.1. La asistencia a las víctimas por parte de entidades especializadas y ONGs

Puesto que de la labor asistencial a las víctimas de trata se ocupan primordialmente ONGs y otras entidades del tercer sector nos centraremos a continuación en el análisis de esta intervención a partir del relato ofrecido por el personal de las mismas, sin obviar las referencias efectuadas por otros profesionales tanto de OAVs como del ámbito forense. Es precisamente este tipo de intervención la que permite dar completo sentido a la aproximación victimológica al fenómeno de la trata, en los términos mencionados en la

introducción de este trabajo, reconociendo que sin una adecuada identificación y atención a las víctimas difícilmente será viable la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud.

El contacto de la entidad asistencial con la víctima puede venir determinado por distintos cauces. Que sea la propia víctima quien establezca este inicial contacto no resulta una opción a descartar, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de mecanismos que las propias entidades emplean para aproximarse o hacerse visibles a aquellas. Este es el caso, por ejemplo, del teléfono 24h al que puede llamar cualquier persona que requiera información o asistencia o bien de las unidades móviles de apoyo que transitan por espacios en los que se ejerce la prostitución.

(E 32) Nuestro trabajo es bastante diferente al de otras asociaciones porque nosotros tenemos una unidad móvil de rescate y entonces lo que tratamos es de buscar a las mujeres. Si no, claro, solamente tendríamos los casos que la policía nos hubiese derivado.

A parte de la propia víctima, también otras personas, entidades o instituciones que sospechen de una trama de trata pueden emplear alguno de estos servicios para contactar con la entidad y procurarle la atención necesaria. En estos supuestos, personal de las ONGs analizan la situación para, eventualmente, valorar la condición de víctima y, llegado al caso, facilitar que la policía pueda identificarla como tal. Con todo, es importante señalar que las ONGs no condicionan su intervención prestacional a la identificación formal de la víctima como tal por parte de la policía. Y para ilustrarlo nos planteaban incluso desde una entidad el siguiente caso:

(E 30) Y hay casos que, al contrario, que a ellos (*en referencia a agentes policiales*) les ha interesado, porque así de claro te lo digo, han visto que en tal piso de prostitución hay lucro de la prostitución ajena, pero les interesa intentar cargar por lo más aunque luego se queden con lo menos. Entonces en un primer momento a lo mejor argumentan que hay un delito de trata cuando solo hay lucro de la prostitución ajena. Vas allí, y yo, claro, fenomenal por la señora, me alegro muchísimo por ella de que la reconozcan porque va a tener más protección, pero para nosotras no es un caso de trata (...) Entonces, no nos condiciona cual es la determinación oficial. Nosotras si consideramos que es un caso de trata le ofrecemos ayuda en función de sus necesidades y la vamos a ayudar con independencia de que se hayan reconocido como víctimas de trata.

En otras ocasiones, el contacto de la ONG con la víctima se establece precisamente a partir de una intervención policial previa, a raíz de la cual se ha tenido conocimiento o incluso se ha aprehendido a personas de las que se sospecha que pueden ser víctimas de trata. En estos casos, la entidad suele trasladarse al lugar donde se halla la víctima

para informarle, explicarle qué se le puede ofrecer, escuchar las necesidades que tiene, y en función de ello, ofrecerle ayuda.

(E 2) “Automáticamente avisamos a una ONG, automáticamente que se la detecta como víctima, incluso en la propia entrevista y demás suele estar una asesora de la propia ONG. Y entonces ya a partir de ella nosotros la entrevistamos, hacemos la declaración, le activamos todo el protocolo y luego ya la ONG se hace cargo de la chica. Nosotros siempre actuamos con ellas. “

(E 30) “Te llaman: ‘venid a hablar con una mujer’. Vale, muy bien. Primer criterio: nosotras vamos. O sea, aquí nadie trae a la mujer como si fuera una maleta. Aunque muchas veces es como que lo pretendan: ‘os llevamos a una mujer’. No, usted perdona, estamos hablando de una persona y ella ya ha pasado suficiente en una situación en la que no ha podido decidir ni ser informada de nada. Entonces, nosotras vamos y hablamos.”

(E 36) “La policía a veces desarticula una red, se quedan con diez víctimas allí que no sabe qué hacer con ellas, donde llevarlas, y la policía ya conoce todo este tipo de entidades, como hacerlo para derivarlas y que se hagan cargo de un primer acogimiento”

Una vez la víctima entra en contacto con las entidades, la intervención de estas va a efectuarse en base a unos presupuestos clave que han aflorado reiteradamente en las entrevistas con el personal de las mismas y que se hallan también consignadas en el Protocolo marco. Así, en primer lugar, las entidades insisten en la necesidad de ofrecer una intervención individualizada para cada una de las víctimas detectadas. Ello supone una aproximación tranquila a la víctima, facilitarle un clima de confianza en el que pueda expresar sus circunstancias y a partir de ahí, valorar el riesgo en que se halle, las necesidades de protección y los recursos asistenciales que pueden ofrecérsele, siempre poniendo a la víctima en el centro de la intervención.

(E 32) “Nosotras nos ponemos al lado de la mujer y trabajamos con la mujer, no para la mujer, sino con la mujer. Yo creo que son cosas diferentes de cómo nos planteamos el intervenir con ellas.

En segundo lugar, las entidades subrayan la idea de una intervención integral en la asistencia a la víctima, que incluya el ofrecimiento de un catálogo lo suficientemente amplio de opciones prestacionales para garantizar el apoyo jurídico, el alojamiento, la asistencia sanitaria y psicológica y la cobertura de las necesidades básicas. Las entidades incluyen también programas de inserción laboral, formación y el aprendizaje del idioma en caso de no conocerlo. Desde esta perspectiva, se señala la importancia de una acogida integral, hasta al punto de expresarse, por parte de una de las entrevistadas, que si no se dispensa en estos términos la acogida deviene inútil pues no supone para la víctima una verdadera alternativa de vida.

(E 31) “Sólo si se ofrece una asistencia y acompañamiento diario, sólo de ese modo podemos favorecer su recuperación, de manera que cojan confianza y nos vayan contando lo que han sufrido. Pero tenemos que proponerles la alternativa. Si no somos capaces de esto desde la acogida, la asistencia legal, psicológica, lo que sea, es normal que no podamos rescatarlas, es normal que a lo mejor vuelvan con la red o no se desvinculen completamente porque la red les ofrece más alternativas y opciones que nosotras (...) Sé de casos en que las víctimas de trata que han sido rescatadas en una intervención policial dicen ‘pero el tratante me ha dado trabajo, en mi país no tenía, ¿y nosotros qué le ofrecemos?’”

(E 32) Protección integral es eso, que desde que es detectada hasta que finalmente es insertada en la sociedad tiene que tener una serie de ayuda que son integrales, esto es, en el ámbito social, sanitario, jurídico y formativo (...). El tener un equipo multidisciplinar da posibilidades de ganar cobertura”.

Y un trabajador de una OAV señalaba:

(E 34) “Creo que hay que garantizar a esta persona autonomía, y ello implica tener las necesidades básicas cubiertas. Pero no solo de urgencia, sino que esta persona pueda construir un nuevo proyecto de vida. Y por lo tanto esto implica vivienda, trabajo, un acompañamiento psicológico y emocional para recuperarse y fortalecerse.

En tercer lugar, se menciona también la importancia de que los recursos sean especializados para víctimas de trata de modo que los prestadores dispongan formación específica para ofrecer una mejor acogida y una respuesta adaptada al impacto del proceso de trata sobre la víctima. La especialización permite también calibrar los riesgos que acechan a la víctima y tener capacidad para adoptar ciertas medidas de seguridad orientadas a alejarla de la influencia de los tratantes, aun cuando, como nos comentaron dos de las entidades, las víctimas no suelen solicitar este tipo de medidas. Estos recursos especializados, a diferencia de los genéricos, son menos conocidos con lo que se aleja el riesgo de que los tratantes puedan localizar allí a las víctimas y someterlas nuevamente a su influencia.

(E 32) “La experiencia te dice que la mujer no te pide ir a un piso para estar protegida, entre otras cosas, porque no conciben el riesgo, muchas veces somos nosotras las que les tenemos que decir que estarían mucho mejor, que no llamen a su familia,... O sea, les damos indicaciones porque efectivamente no tratamos de aislarlas como las aísla la red, les decimos que hagan una nueva vida, pero sí que se trabaja la percepción del riesgo.

(E 31) “Es verdad que muchas víctimas no quieren el recurso específico (...) son necesarios para alejarlas de la influencia de los tratantes, porque los demás centros son conocidos. Entonces muchas víctimas son localizadas allí por los tratantes que vuelven a acogerlas bajo su influencia y amenazarlas y por eso muchas desaparecen, porque han

sido obligadas por los tratantes. De ahí la importancia de los recursos especializados que tienen ciertas medidas de seguridad en beneficio de las víctimas”.

Finalmente, la intensidad de la intervención tuitiva va a depender de las necesidades de la víctima y también de la ayuda que ésta acepte, resultando importante poder consensuar con ella el grado de protección y ayuda que se le vaya a proporcionar, así como el tiempo en el que vaya a dispensársele tal asistencia. La idea que subyace a este planteamiento y que se repite en las entrevistas con profesionales del tercer sector es la de la voluntariedad, el respeto a la voluntad de la víctima, si bien habiéndole proporcionado previamente la información pertinente sobre la situación en la que se halla y los recursos disponibles.

(E31) “Al final siempre se tiene que respetar lo que es la voluntad de la persona porque encima eso, viniendo de una situación tan compleja, a veces el recurso específico le puede dar la idea de una cárcel, como una obligación otra vez, como que le están obligando a algo. Es importante ver cuáles son las necesidades y la voluntad de la persona. Y por eso es tan importante la formación de los profesionales que trabajamos en las organizaciones”

(E 32) “Muchas veces dicen que a las ONGs solo hay que llamarlas cuando la mujer quiere tener un alojamiento y protección. Yo considero que eso es un error. Nuestro trabajo es muchísimo más fácil cuando previamente hemos informado a las mujeres de que existe nuestra organización y que estamos para ayudarlas, para informarles de sus derechos y para ayudarlas en lo que nos pidan. Nosotras las informamos y son ellas las que pautan donde nosotras tenemos que apoyarlas.”

Entrando ahora en la revisión de las concretas prestaciones que se ofrecen a las víctimas de trata, probablemente la intervención más relevante y urgente en los supuestos en que la víctima se halle en situación de riesgo o en situación de desamparo es la de ofrecer **alojamiento** seguro en casas de acogida. La intervención individualizada supone, en este ámbito, valorar tanto el tipo de alojamiento en el que la víctima vaya a ser hospedada como el tiempo del que vaya a hacer uso de este recurso. Estas decisiones pueden concretarse en el alojamiento en casas de emergencia -cuando se detecta un peligro grave- y avanzar en un régimen de mayor normalidad hasta pisos de autonomía cuando las víctimas están ya en una última fase en su proceso de recuperación y reinserción.

(E30) “Tienen por nuestra parte o bien una acogida de emergencia, que son más o menos de 1 a 15 días, 1 mes, 2 meses, en función del caso, de cómo llegue la mujer, cómo está y qué quiere. Luego hay una casa más de acogida a medio plazo que puede ser de 6, 8 ,9 meses, depende. Y después de esa casa de acogida a medio plazo hay lo que llamamos pisos de autonomía que son para las mujeres que ya están en la última fase de su proceso de recuperación y normalmente está previsto para cuando ya tienen un empleo,

unos mínimos ingresos que pueden estar en ese piso simplemente sufragando sus gastos, sin alquiler hasta cuando ya tienen pequeños ahorros y se pueden establecer de forma más autónoma.”

A parte de las casas de acogida, las entidades disponen también de centros de día en los que cuentan con la intervención de trabajadores sociales, psicólogos, abogados y educadores que acompañan a las víctimas en su proceso personal.

(E 29) “Hay personas que deciden quedarse aquí y entonces pasan a permanencias y se establece un plan individual de mejora en todas las áreas. Entonces tenemos que valorar caso por caso, porque la mochila de cada una es muy distinta. Tenemos desde personas analfabetas que han aprendido a leer y escribir con nosotras a personas que son universitarias. Tenemos que hacer muy a medida el tema formativo, incluso el idioma que es la base fundamental. También tenemos un proyecto exclusivo de recuperación, apoderamiento e inserción (RAI) en el que se trabaja el tema de las competencias personales, y ello les permite acceder a unas prácticas laborales o formativas. Se facilita toda la parte de inserción laboral, acceso a la vivienda,...”.

Asimismo cuando la víctima no es nacional y desea retornar a su país de origen las entidades gestionan el transporte así como una pequeña cantidad de dinero para hacer frente a los primeros meses. Si por el contrario se plantea quedarse en España se establece un plan de mejora en las diversas áreas, incluyendo formación, idioma, vivienda, inserción laboral, lo que puede suponer acceder a unas prácticas laborales acompañadas por una entidad.

Para finalizar esta revisión de las prestaciones y ayudas existentes para las víctimas de trata haremos breve mención a las aportaciones que al conocimiento de esta cuestión vertieron los funcionarios de instituciones penitenciarias. La presencia de este colectivo profesional en la presente investigación vino motivada por la evidencia de que también estos profesionales pueden entrar en contacto con víctimas de trata eventualmente castigadas y encarceladas por la comisión de un delito durante el propio proceso de trata y que pueden requerir desplegar algún tipo de recurso para la protección o la asistencia a este tipo de internos. Particularmente sensibles ante la posibilidad de estar efectivamente lidiando con internos que a la par que autores de un delito son también víctimas, surgieron, en el decurso de las entrevistas, propuestas para mejorar la detección de estos supuestos y para poder prestar, en su caso, algún tipo de protección a las víctimas, en especial, cuando estas alcanzan el régimen abierto y pueden ser de nuevo contactadas por sus captores.

(E 23) Recuerdo el caso de una interna muy jovencita, rumana, y nos explicaba que estuvo en un círculo de prostitución en contra de su voluntad, que escapó de los captores y que al robar entró aquí. Aquí estaba bien, pero cuando se acercaba la libertad ella tenía

miedo. Entonces sí que es verdad que la derivamos a un centro de acogida, un centro educativo y de allí también escapó porque ella tenía miedo y decía 'me van a encontrar'. Pero bueno nosotros no tenemos nada, o sea judicialmente o como seguridad policial, no tenemos nada. (...) Estaría bien que viniera un equipo exterior a detectar y que pudiera ayudarlas, o sea, como paralelo al proceso penitenciario. Pero igual que existe apoyo para mujeres maltratadas o ayuda contra la drogadicción, pues que hubiera ayuda para estas víctimas, que se les pudiera dar apoyo, que yo pueda llamar a una entidad para decir que hay una víctima.

En lo que a la actuación a nivel tratamental respecta, los funcionarios entrevistados explicaron que no existe un programa específico y que intentarían, en la medida de lo posible, ubicar a estos internos o internas en un módulo menos conflictivo así como ofrecer la participación en programas en los que puedan trabajar cuestiones vinculadas a la autoestima

(E 23) "Yo lo que hago es educación emocional. Les digo, a ver, vosotras estáis aquí y lo que tenéis aquí es tiempo. Pues de lo malo vamos a sacar lo mejor. (...) Reforzar la autoestima, la personalidad interior, gestionar la ansiedad, falta de confianza, baja autoestima, falta de seguridad.

(E 24) Nosotros en el estadio en el que estamos lo único que podemos hacer es trabajar esa situación, darle al interno suficiente información y capacidad si podemos para que cuando se encuentre en esa situación tenga salidas: tienes denuncia policial, puedes acudir a ayuda social de apoyo; que sea capaz de detectarlo cuando están intentando utilizarlo como instrumento del delito o la estén poniendo en situación de debilidad para después aprovecharse de ella. (...) El psicólogo trabaja mucho con ellas el tema de la vulnerabilidad, la autoestima, si han sido cosificadas pues dotarlas de nuevo de eso, que puedan volver a tener sensaciones de una persona que no ha sido sometida a tal presión

(E 25) A ver, un programa específico para víctimas de trata no tenemos, es que no existen, creo yo. (...) A esta persona nosotros lo que hacemos es un tratamiento genérico por lo que necesita, les estamos ofreciendo tratamiento sin que sea específico para víctimas de trata. Si ha sido víctima de trata, a lo mejor es por su forma de ser en cuanto a recursos personales, imaginemos que es una persona con poca autoestima, muy dependiente. También influye como es la persona, sus habilidades sociales, capacidad para decir no. Entonces si la causa hubiera sido sus características personales, aunque no digo al 100%, podría recibir este tratamiento donde trabajaríamos la autoestima, la educación emocional, la resolución de problemas de forma efectiva

2.2. Recursos escasos y otras dificultades en la prestación de asistencia

Una de las mayores dificultades con las que topan las entidades del tercer sector para poder prestar con la diligencia adecuada las prestaciones necesarias para las víctimas

de trata es la falta de recursos económicos. En esta cuestión existe unanimidad entre las entidades entrevistadas.

(E29) “Tenemos un problema de recursos. Identificamos. Y luego, qué? Somos los que somos, tenemos lo que tenemos y no damos abasto”

(E 33) (*los recursos*) no son suficientes. Y están bien empleados porque los gestionan entidades con mucha sensibilidad. En este sentido, son recursos bien empleados, tienen atención jurídica, tienen atención psicológica, pisos para dar alojamiento seguro y tal. (...) Si hubieran mejores mecanismos de detección de las víctimas, si se detectara un mayor número de lo que lo son, pues estos recursos se quedarían cortos. Los recursos pueden ser adecuados porque la detección es baja.

También agentes policiales y Fiscales mencionaron la escasez de recursos con que trabajan las ONG tras haber sufrido importantes recortes económicos. Se señala, en este sentido, que muchas entidades no disponen de suficientes recursos humanos ni económicos para hacer frente a todo y, en algún caso, se insiste en la idea, también manifestada por alguna entidad, que un aumento en la detección de víctimas podría poner en riesgo la oferta asistencial.

(E 2) “Las propias ONGs nos dicen que traspasan todo lo que pueden ofrecerles, porque ellas a las víctimas les ofrecen muchas veces vivienda, pero claro es por un tiempo concreto, igual que les dan dinero cada mes para subsistir. (...) Las ONGs les dan todo tipo de asistencia, pero no pueden atender a todas las mujeres que llegan (...)”

(E 5) “El problema lo tendremos el día que haya un mayor volumen de víctimas porque a lo mejor que nuestro programa de gestión de víctimas sea un éxito, y en lugar de nueve sean veintinueve, entonces no sé si tendremos capacidad para asistir a las veintinueve. Ahora de momento nos arreglamos poniendo parches, pero solo son parches”.

La disparidad de recursos entre las diversas regiones es también una idea que aparece en las entrevistas, estando algunos territorios especialmente desprotegidos por el hecho de no operar en ellos entidades que sí prestan asistencia en otras regiones. Fiscalía lamenta que no haya ONGs con implantación en el conjunto del territorio español que puedan prestar semejante servicio allí donde la víctima se halle. En todo caso, esta deficiencia podría por lo menos parcialmente, y en opinión de alguno de los fiscales entrevistados, verse suplida por la colaboración entre ONGs. Y en este sentido una de las entidades manifestaba:

(E 21) “Nuestro dispositivo solo está en (*cita una Comunidad Autónoma*). Hubo un tiempo en el que también estaba en Madrid y en otras comunidades porque era financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aunque me parece que terminó en 2013. O sea que actualmente solo tenemos el de (*cita la Comunidad Autónoma*) lo que

no quiere decir que si vienen una víctima no la vamos a atender. Nosotras trabajamos mucho en red y si detectamos un caso en *(cita una localidad a título de ejemplo)* nos pondríamos en contacto con nuestros compañeros de aquella otra Comunidad y si la persona quisiera no habría ningún problema en que nosotros le facilitásemos el traslado para que la atiendan allí en las mejores condiciones posibles, ya que ellos son los especialistas

La asunción de una escasez de recursos para las entidades a las que se ha venido endosando la asistencia a las víctimas lleva a reflexionar sobre la adecuación del modelo con el que se viene operando. En este sentido se plantea si no debería ser la propia Administración quien extendiera los servicios necesarios para asistir a las víctimas de trata. De mantenerse el actual sistema empero, los propios Fiscales perciben como indispensable dotar de mayor financiación a las ONGs.

(E 14) “En España la protección está en manos de ONGs. Entonces, una de dos, o le das más recursos a las ONGs o articulas mecanismos públicos de protección a las víctimas de trata. No hay otra. ¿No lo quieres hacer públicamente? ¿No quieres establecer un mecanismo público de derivación de víctimas con presupuesto general del Estado? Bien, pues entonces tendrá que financiar a las ONGs que se dedican a esto. Bueno, o puedes no hacerlo, pero entonces tendrás un problema.

Esta reflexión coincide con un reconocimiento generalizado entre los profesionales del ámbito forense de la labor fundamental que desarrollan las ONGs en la asistencia a las víctimas de trata. Son estas entidades las que, al parecer del resto de operadores, se ocupan primordialmente de la asistencia y protección de aquellas. Las frecuentes referencias a la ejemplar actuación de las ONGs que se recogen en las entrevistas al colectivo policial y de fiscales son una buena muestra de ello.

(E 1) “(...) a nosotros nos ven como policías (...) pero ya una vez que están en piso de acogida, que hay personas, que se siente querida por ellas, protegida, que están peleando por ella, pues ahí sí que es cuando se abre más y dice más cosas”.

(E 2) “Yo sé por ejemplo que en esas ONGs les dan formación de todo tipo, desde el propio idioma, formación profesional (...) incluso sobre vivienda, en piso de acogida, asistencia de vestimenta.

(E 14) “Las ONGs trabajan muy bien y buscan lo que haga falta. Sí, trabajan muy bien.

(E 13) “Se reúnen (Fiscalía y las ONGs) y ha habido muchas investigaciones que se han iniciado gracias a la ONG. Llamamos a la Brigada, vienen, se ponen en contacto e inician una investigación y acaba con éxito. Casi siempre que son a instancia de las ONGs acaban con éxito”.

Por otro lado, es también importante señalar que este reconocimiento generalizado a la labor de las entidades evidencia la soledad con la que las mismas se vienen enfrentando a esta labor y la escasa implicación de las OAVs en la asistencia social a las víctimas de la trata de seres humanos. En este sentido, de las entrevistas mantenidas con los profesionales de OAVs se evidencia que la intervención de estos profesionales se ha dirigido en estos últimos tiempos de forma prioritaria a prestar asistencia a las víctimas de violencia de género, por lo que en el caso de víctimas de trata, la labor de apoyo se ha visto circunscrita fundamentalmente a un acompañamiento de las víctimas a lo largo del proceso judicial, a la prestación de cierto apoyo psicológico y a remitir a las víctimas a las entidades especializadas que puedan atenderlas. Si bien nos hemos referido ya en el anterior apartado al acompañamiento de las OAVs en el proceso judicial, en lo que respecta a la intervención en materia psicológica, la misma se concreta en la realización de periciales psicológicas a instancias del propio juzgado y, por otro lado, a prestar una concreta asistencia psicológica dirigida a minimizar los efectos de temor o desconfianza que generalmente presenta la víctima, si bien también en este caso es importante contextualizar esta intervención de apoyo en el marco de proceso penal. No en vano, en la mayor parte de ocasiones las víctimas de trata llegan a las OAVs habiendo sido ya previamente detectadas e identificadas como tales por la policía, incluso asistidas por una ONG, y el profesional de la OAV interviene únicamente a petición del juez. En estos supuestos, el apoyo psicológico que se presta a la víctima se concreta, como nos decía un profesional de una OAV, a una serie de actuaciones dirigidas a facilitar la participación de la víctima en el juzgado:

(E 35) “Te llega una persona, que va a un sitio que no conoce, personas que no conoce, en una situación así, lo más importante es desangustiar, intentar destensionar lo máximo posible, facilitar que pueda hacer una declaración de manera lo máximo coherente y tranquila posible. Muchas veces es ayudar a identificar las sensaciones que tiene. En el momento que identificas las sensaciones, la persona sabe lo que le está pasando y entramos en un punto de confianza y ello facilita que pueda enfrentarse al juez o al magistrado. (...) La víctima venía acompañada de una profesional de referencia de una entidad. Y entonces nos dijeron que este era el caso, explotación sexual y trata, esta situación. El juzgado nos pidió que diéramos atención y asistencia si fuera necesario en este caso. Nosotros hicimos el acompañamiento y de hecho las personas que venían acompañando a esta persona de la fundación o ONG o lo que fuera esta entidad, quedaron en espera, y entonces quien hizo todo el seguimiento, el acompañamiento por las dependencias, las esperas, las explicaciones, fui yo. Fue un caso que duró prácticamente todo el día, incluso con las ruedas de reconocimiento y todo esto

Siendo la prestación de apoyo psicológico fundamental en el proceso de recuperación de muchas víctimas, no solo las de trata, parece que las OAVs tienen también un problema importante de recursos humanos que dificulta que incluso esta prestación sea una quimera para los profesionales de las Oficinas y que deban contactar con servicios de orientación y asistencia jurídica y de apoyo psicológico dependientes de los ayuntamientos. Por este motivo los profesionales entrevistados en las OAV expresan que más allá de la asistencia y acompañamiento a juicio y, en caso de disponer de servicios, prestar cierta asistencia psicológica, cualquier otra necesidad que presente la víctima, es derivada a las entidades especializadas en víctimas de trata.

En definitiva, no es que se detecte, en absoluto, una falta de sensibilidad en los profesiones de las OAVs hacia las víctimas de la trata, sino más bien parece que la focalización de su cometido durante más de una década en las víctimas de la violencia de género han conducido a que sus profesionales asuman que para las víctimas de la trata de seres humanos la intervención consista en remitirlas a otras entidades. Esta posición se ha visto, no obstante, alterada tras la aprobación de la Ley 4/2015 y del Reglamento que la desarrolla, que amplía como vimos los cometidos propio de las OAVs. En todo caso, la posición secundaria en la que las OAVs se han colocado hasta tiempos recientes en la asistencia a las víctimas es percibida también en estos términos por las propias ONGs quienes han expresado, en los siguientes términos, su escaso contacto con las OAVs.

(E 30) “A ver, yo La oficina de atención a la víctima te diría que ni siquiera sé ahora mismo por ejemplo en la comunidad de Madrid si existen o no existen. O sea, sé que han existido, pero sinceramente es que no sé si ahora existen o no, y desde luego, colaboración nula, derivación nunca ha habido”.

A mayor abundamiento, la falta de recursos a la que venimos aludiendo no se circunscribe únicamente a la dimensión económica, esto es, a la disponibilidad de recursos económicos y humanos que las entidades asistenciales tienen a su alcance, sino que comprende también una serie de carencias que, si bien amplificadas en contextos de crisis económica como la que ha imperado en estos años, derivan de unos apriorismos de carácter conceptual o ideológico. Así, son muchos los profesionales entrevistados que señalan la falta de recursos para atender a víctimas que no sean mujeres. Esta situación es el resultado de una visión muy parcial del fenómeno de la trata que identifica como tal, básicamente, la trata de mujeres para explotación sexual. Se trata de una cuestión que ha sido ya puesta de manifiesto en anteriores trabajos tanto jurídicos (POMARES, 2013; VILLACAMPA, 2010) como empíricos (VILLACAMPA, TORRES, 2012). La circunscripción de la trata de seres humanos al fenómeno de esclavización

sexual en el ámbito de la prostitución genera que otras víctimas de la trata, explotadas en el ámbito laboral, criminal o en la mendicidad sean solo puntualmente contempladas. Y ello no solo a efectos de identificación de estas víctimas, sino también, a posteriori, en el ámbito asistencial. Admitiendo, como hacen las entidades entrevistadas, que los recursos disponibles para las mujeres víctimas de trata para explotación sexual son ya de por sí insuficientes, la situación deviene mucho flagrante ante la práctica inexistencia de recursos especializados para hombres, algo de lo que se hacen eco todas las entidades entrevistadas, así como también algunos policías, fiscales y trabajadores de OAV. En este sentido, si bien se cuenta con algunos recursos asistenciales para varones en contextos de prostitución u otros, no los hay de carácter especializado para cuando aquellos son víctimas de trata, situación que, sin embargo afecta a un creciente número, en especial cuando la finalidad de la trata es la explotación laboral o criminal de la víctima.

(E 29) “Nos pasó en un tema de trata laboral. Unos hombres pakistaníes en Tarragona. Estas personas salieron de comisaría y adiós muy buenas. Incluso hemos tenido que averiguar si les crearon un expediente de expulsión. Y hace unos años en Mataró, en talleres textiles con población china, 200 personas que estaban trabajando y viviendo en aquel lugar de explotación, no hubo ninguna respuesta, y tuvieron que desprecintar para que pudieran pasar la noche en el mismo lugar del que habían sido liberados”.

(E 20) No hay recursos especializados para hombres víctimas de trata. Todo se ha centrado en mujeres y sobre todo en víctimas de explotación sexual, este es el gran error que encontramos. Continuamos focalizando la mirada en este aspecto y la trata es un fenómeno muy amplio y suficientemente complejo como para que ampliemos un poco la mirada.

(E 5) Hay un déficit en relación con la asistencia a víctimas hombre. Algunas de las entidades con las que colaboramos solo son para mujeres, y me encuentro que en explotación laboral necesito recursos para hombres y entonces tengo otra entidad, con la que no tengo firmado convenio, que no tiene una infraestructura tan buena como otras, pero que sí tienen pisos en los que puedo meter hombre. Se podría mejorar mucho...”.

(E 14) Las ONGs que forman parte de la red española protegen fundamentalmente mujeres y niñas, víctimas de trata para explotación sexual. Entonces, la protección de otro tipo de víctimas está en el aire. Y la protección de los varones también.

Del mismo modo, las entidades ponen de manifiesto la escasez de recursos para **menores** víctimas de trata. En este sentido se denuncia la falta de una asistencia especializada para niños y niñas víctimas de este delito y la equiparación en el tratamiento con aquella que se dispensa a los menores desamparados o en tutela administrativa. La inadecuada atención que se presta a esta especial situación de

vulnerabilidad y de riesgo deviene palmaria al parecer de todas las entidades que han coincidido en señalar la falta de recursos para atender a los menores, y en concreto, más a niños que a niñas. Entre las dificultades que se plantean en estos supuestos, una de las entidades menciona la falta de percepción del riesgo que experimentan estos niños y niñas, y que viene motivada muchas veces por el hecho de ser sus propios familiares quienes los someten al proceso de trata.

(E 31) “Falta acogida para víctimas que no sean mujeres, que sean niñas o niños o que sean hombres”.

(E 32) “Estamos tratando de visibilizar el tema de los menores (...) nosotras hemos protegido y hemos atendido itinerarios individualizados de treinta menores desde 2008 (...) se tiene que crear centros y no considerarlos menores no acompañados, porque no lo son, porque los centros que hay de protección de la infancia no están preparados para trabajar con esta problemática (...) (*los niños*) no perciben, porque la experiencia que tenemos nosotros es que en muchísimas ocasiones quien pasa la frontera de estas niñas son familiares, con su autorización, con lo cual no perciben para nada, ¿qué niño va a creer que su madre le va a hacer daño o le va a utilizar aquí para la mendicidad?”

Desde Fiscalía se denuncia también la falta de recursos para víctimas que presentan discapacidad psíquica

(E 14) “Las ONGs que forman parte de la red española protegen fundamentalmente mujeres y niñas. Fundamentalmente, que no totalmente. Víctimas de trata con fines de explotación sexual. Entonces, la protección de otro tipo de víctimas de trata está en el aire. Yo lo siento, pero es así. Y la protección de los varones, también”.

Y, para finalizar, los desequilibrios entre los recursos disponibles se ponen de manifiesto también en relación con la mayor dificultad para prestar asistencia en zonas rurales que en zonas urbanas. Los recursos se concentran en zonas urbanas de modo que en los pueblos puede resultar más complejo tanto la detección de víctimas como su correcta asistencia.

(E 21) “A nivel asistencia y de protección, estoy pensando en los autobuses estos famosos que se van a las zonas de explotación sexual donde hay mucha prostitución y dan información, también están centralizados en grandes ciudades. ¿Qué pasa en los pueblos aquellos perdidos de Albacete o Castilla la Mancha donde nadie llega? Y te estoy hablando de explotación sexual, que en explotación laboral, criminal y demás todavía me parece mucho más complejo, y obviamente, en esto no se están casi destinando recursos”

2.3. Retos en la asistencia a las víctimas de trata

De las entrevistas efectuadas con profesionales cabe extraer también propuestas y comentarios orientados a mejorar la prestación asistencial a las víctimas de la trata de seres humanos. En buena medida dichas propuestas, que en ocasiones se formulan más bien como verdaderas demandas o reclamaciones, provienen primordialmente de las entidades del tercer sector, si bien se trata de ideas, que en mayor o menor grado, han sido también apuntadas por otros profesionales del ámbito forense.

En primer lugar, se reclama una mejor coordinación en la intervención. El hecho de que tantos profesionales puedan entrar en contacto con la víctima evidencia la necesidad de coordinar las intervenciones, con el fin de proporcionar los recursos más adecuados para su protección, su restablecimiento a nivel personal y también, en su caso, para posibilitar su localización si decidiera participar en el proceso penal. Dicha coordinación resulta necesaria tanto en una vertiente interna como externa, entendiéndose el primer supuesto como la coordinación de cada colectivo de profesionales entre sí, y haciendo referencia el segundo término a la coordinación entre diversos sectores profesionales. En relación con la coordinación interna, desde Fiscalía se destaca la existencia de una red de Fiscales especializados en trata de seres humanos en la que participan el Fiscal de Sala coordinador de extranjería, los fiscales adscritos al fiscal de Sala y los cincuenta fiscales establecidos en las diversas provincias. En el ámbito de las entidades del tercer sector cabe mencionar los trabajos de la Red española contra la Trata en la que participan actualmente más de veinticinco ONGs y que deviene un espacio de análisis de buenas prácticas y de trabajo conjunto para aunar esfuerzos y coordinar la asistencia y la protección a las víctimas. Con todo, las entidades siguen manifestando la necesidad de una mejor coordinación, pues si bien reconocen haber alcanzado mayor consenso y cooperación, en especial entre entidades que trabajan en una línea similar o que son próximas geográficamente, la misma no es todavía suficiente. Ello puede dar lugar a que en alguna ocasión, por ejemplo, no haya podido conocerse si una persona recibió ya anteriormente atención por parte de otra entidad.

(E 32) “Tenemos que coordinarnos. Porque la mujer que se ha ido de un recurso en (*la localidad X*) ahora mismo lo estamos identificando en un centro de internamiento en Madrid y nos está diciendo que ya estuvo en un recurso en *X* y que no se la identificó, pero sí que es víctima de trata.”

Por otro lado, en lo que a la coordinación entre colectivos profesionales respecta, destacan los progresos en la coordinación de las actuaciones entre fiscalía, guardia civil, policía, inmigración y ONGs, que ha venido impulsada por Fiscalía de extranjería. Así, por ejemplo, deben entenderse las relaciones mensuales entre miembros de la Red española contra la trata y Fiscalía de extranjería, reuniones que se perciben tanto por

fiscales como por algunas entidades como especialmente provechosas para avanzar en la detección de problemas y la implementación de buenas prácticas, la mejora de la coordinación y el intercambio de conocimientos desde la perspectiva asistencial y forense.

(E 13) “Tenemos una comunicación permanente con la red española contra la trata. Aquí se reúnen necesariamente, obligatoriamente una vez al mes, una representación de las ONGs más caracterizadas. Se reúnen para todo, es decir, para plantear problemas generales como plantear casos concretos”

(E 14) A nivel central estamos en contacto permanente por teléfono, por mail, con las ONGs, con inmigración, con la guardia civil y con la policía. Continuamente. De lo que se trata es de hacer que esto funcione a nivel central y a nivel provincial.

(E 31) Lo que sí tenemos es una práctica muy buena desde hace varios años. Nosotros como red española contra la trata nos reunimos mensualmente con Fiscalía. Nos reunimos con la fiscal adjunta de Sala, y creo que la implicación de fiscalía en estos años en España ha sido fundamental para avanzar en la trata. Creo que esta es una buena práctica y que habría que extender con otros actores. (...) Solo esa coordinación permite ver cuáles son los problemas e intentar encontrar soluciones, y es así, en estos años hemos visto que eso ha funcionado poquito a poco”.

Con todo, y a pesar del reconocimiento al impulso de Fiscalía por sentar las bases de una mejor coordinación, las entidades del tercer sector se muestran todavía críticas con los niveles alcanzados. Así, en primer lugar, las entidades reclaman circuitos claros de intervención, en términos similares a lo que sí se ha desarrollado para las víctimas de violencia de género.

(E 32) “No se le puede dejar a un funcionario para que tire de un listado de 45 organizaciones porque probablemente lo que le va a ocurrir es que de esas 45 organizaciones le cogen el teléfono dos que tenemos teléfono 24h. Es que, claro, son las doce de la noche, tienen un horario de oficina, pues todas esas cosas son las que habría que poner en el listado, porque el agobio que tiene que pasar el funcionario con cinco mujeres en comisaría que no sabe dónde las va a mandar o a quién las puede remitir”

(E 20) Nosotros echamos en falta concreción, que es lo que venimos reclamando, que podamos salir con circuitos claros, que estamos ya un poco cansados de letra, de hojas, y yo con este protocolo ¿Qué hago? ¿Quién es el responsable de esto? Circuitos claros para poder actuar, porque hay casos de urgencia y se ha de actuar con rapidez, que se puedan establecer responsables.

(E 29) “Yo siempre les he dicho, de acuerdo, ahora no tenemos dinero, pero explíquenme cual es el despliegue para las víctimas de trata, y nadie te explica la hoja de ruta. Entonces no tenemos claro si dentro del marco de todo el despliegue que se ha

producido en los casos de violencia en el ámbito de la pareja, de cuantas cosas podrían beneficiarse las víctimas de trata, por ejemplo”.

Asimismo, en segundo lugar, si bien el protocolo prevé que sea el fiscal de extranjería quien lidere la coordinación entre los profesionales, no todas las entidades coinciden en que esta sea la mejor decisión. En este sentido se reconoce que se trata de un profesional que suma esta función a una ya elevada carga de trabajo, lo que puede comportar que, incluso en los supuestos de elevado nivel de compromiso con esta causa, no pueda dedicarle el tiempo que la misma requiera. Por ello se propone más bien la creación de un responsable específico, un relator nacional que actúe a modo de observatorio, que pueda evaluar las dinámicas y los precedentes y sentar las bases para la efectiva coordinación.

Para alguna de las entidades, la existencia de un organismo a nivel central debería favorecer una intervención en igualdad de condiciones pues, en su ausencia, las prestaciones en cada territorio dependen del hecho de que se haya adaptado o no a nivel autonómico el protocolo y de la existencia de entidades especializadas en las provincias.

(E 31) Se adoptó el Protocolo marco pero luego tenía que ser adoptado a nivel de cada Comunidad Autónoma. En algunas se ha hecho y en otras se está haciendo, está en proceso y tal. Para mí, lo que es necesario es que haya un organismo a nivel central que coordine el tema.”

Una segunda reclamación de las entidades la constituye la mejora del reflejo normativo de su intervención en este ámbito, algo que ni en su momento la aprobación del Protocolo marco, ni actualmente la Ley 4/2015 parecen haber resuelto adecuadamente. Si bien el Protocolo marco de 2009 supuso un hito para visibilizar la necesidad de contar con instrumentos para una intervención adecuada y coordinada con las víctimas de trata de seres humanos, y aun cuando prácticamente todos los profesionales entrevistados conocen de la existencia del mismo, no todos se muestran familiarizados con sus previsiones. Probablemente el colectivo más complaciente con la existencia del Protocolo es el de los Fiscales y, sin embargo, desde las entidades, y sorprendentemente también desde las OAVs, se formularon críticas hacia el mismo, exigiendo por un lado un mayor reconocimiento a la labor que desarrollan las entidades del tercer sector, y por otro lado, una mayor concreción en los términos en los que quepa plantear la intervención. Así, entre el personal de las OAV nos manifestaron:

(E 36) “Yo soy muy crítica con los protocolos porque son documentos muy bien hechos, muy bonitos, que quedan muy bien, pero luego en la práctica no acaban de ser prácticos.”

(E37) “Si sería suficiente con la activación del protocolo para garantizar la recuperación,

la protección y tal... Quiero pensar que sí, pero no lo sé. Que si ¿falta recoger algunas figuras? El tercer sector, no? Que están haciendo una labor fantástica, afortunadamente hoy están dando un apoyo a la administración... que ya no sé quién da apoyo a quien. Y a lo mejor no está suficientemente recogido, las asociaciones y las entidades.

(E20) Falta mucha concreción, que es lo que venimos reclamando, que se establezcan circuitos claros, porque estamos un poco cansados de letra, de hojas. ¿Qué hago yo con este protocolo? ¿Dónde voy? Circuitos claros para poder establecer responsables y circuitos claros para poder activar en casos de urgencia.

Especialmente críticas con el documento fueron las ONGs, que denunciaron la escasa referencia y la falta de concreción del nivel de intervención que se les requiere en la asistencia a las víctimas. El Protocolo no menciona a las entidades más que como partícipes de los programas asistenciales de las administraciones pero sin establecer preceptivamente su intervención, sin determinar cuando el funcionario debe requerir que la entidad informe a la víctima, sin definir sus cometidos ni el momento ni los recursos con los que pueden intervenir. Algo que queda lejos de una realidad en la que se evidencia el papel absolutamente decisivo que ejercen estas entidades en la asistencia a las víctimas de trata.

(E 30) "La reivindicación siempre ha sido que el protocolo es muy de reconocer la importancia de entidades especializadas pero luego en la práctica todo se deja a la discreción del funcionario de turno. Y se dice que el funcionario de turno que detecte a la víctima tiene la obligación de informarle de la existencia de los servicios. Nosotros lo que pedimos es que siempre se facilite el contacto directo con la víctima (...) Que a la hora de informar a la víctima de qué servicios hay a su disposición, de qué derechos a nivel social tiene, y qué les podemos ofrecer, creo que nosotros le podemos informar mucho mejor que cualquier policía bien intencionado, porque el policía puede informar fenomenal de lo suyo y yo no pretendo hacer su trabajo, pero es que ellos tampoco pueden hacer el nuestro"

(E32) "No hay previsión porque no sabemos con quién están contando. Somos muchas las entidades a nivel nacional pero hay determinadas comunidades que no tienen ni un recurso especializado. (...) En el Protocolo se prevé lo que tiene que hacer la policía y lo que tiene que hacer Fiscalía. Pero no se prevé cómo tiene que actuar policía y fiscalía con las ONGs, o que posición tiene las ONGs en ese protocolo, no aparecen las ONGs en ningún sitio. Se proveerá de asistencia, se dará,... pero ¿quién? (...) Además los menores no aparecen en ningún sitio del Protocolo"

(E 31) "Nuestra participación en todo lo que es trata es siempre facultativa y eso es también un problema porque crea prácticas discrepantes en varias partes del territorio español. (...) En Madrid afortunadamente se ha desarrollado una buena práctica, de colaboración, entonces siempre la policía llama a las ONGs, pero en otras provincias me consta que no. El riesgo es entonces ese: que la interpretación de que algo es facultativo

dependa de la voluntariedad del funcionario en concreto que está aplicando esa norma. Y entonces, en mi opinión, este es el problema más grande: no contar con las organizaciones como un actor que intervenga obligatoriamente, como se ha dado en la policía, fiscalía, etc.”

(E 29) El Estado está muy cómodo diciendo ‘Las Comunidades autónomas se encargarán de las víctimas’ y la Comunidad dice ‘las organizaciones especializadas’, y dices, bueno, ya, pero si estamos, si podemos, si queremos. ¿Qué es eso de ‘y todo se deriva a las organizaciones especializadas?’

Las entidades se reclaman, por el contrario, como actores clave, cuya intervención debe ser inexcusable desde el primer momento, esto es, desde que se detecta la presencia de una víctima y todo ello en un contexto multidisciplinar en el que trabajen junto con los agentes policiales y otros operadores del ámbito forense.

(E 31) “Nosotros somos un actor clave, no simplemente proveedores de servicios que nos llamas cuando tienes una víctima. Tenemos que ser un actor clave porque al estar en la calle sí que tenemos otra perspectiva, otro conocimiento de este fenómeno.”

La tercera de las peticiones es la aprobación de una ley integral para las víctimas de la trata de seres humanos. Algunas entidades son del parecer que una ley integral posibilitaría dar respuesta a este fenómeno de forma global, sin depender de la parcelación que en su momento generaba el hecho que determinadas prestaciones estuvieran dispersas en diversos textos normativos y, en particular, algunas muy relevantes contenidas en la ley de extranjería. Es importante destacar que, dado que las entrevistas se efectuaron antes de la aprobación de la Ley del Estatuto jurídico de la víctima, en un momento en el que parecía que la protección a las víctimas debía emprenderse de forma sectorial -y buena muestra de ello, lo había sido la LO 1/2004- la reivindicación tenía todo su sentido. Tal vez, aprobada una norma que con carácter general pretende dar respuesta a toda víctima del delito, tanto en el marco del proceso penal como en lo relativo a su protección social, y conteniéndose ya en la misma previsiones específicas para víctimas vulnerables, quepa esperar, en un futuro próximo, una mejor asistencia a las víctimas sin necesidad de recurrir a la ley integral.

Finalmente, se plantea también por parte de las entidades la necesidad de evaluar los instrumentos y los procesos implementados para la asistencia a las víctimas. Así, por ejemplo, una de las ONGs señalaba la conveniencia de evaluar la calidad de la asistencia que se presta, tomando en consideración la calidad y la efectividad de los recursos que se ofrecen a las víctimas, y todo ello para comprobar si las entidades que reciben subvenciones están efectivamente capacitadas para prestar una asistencia integral especializada. En este sentido, y de forma crítica y coherente, nos decía:

(E 32) “Creo que hay que evaluar los recursos, no por formar parte de una convocatoria

de trata ya estás habilitado para hacer un servicio especializado en asistencia integral para víctimas, creo que no todo vale. (...) yo ahí doy un paso al frente y digo 'si X (*en referencia a la entidad en que presta servicio*) no está habilitada, nos tendremos que retirar', es decir, no todo vale (...) Hay que tener en cuenta si esa asistencia ha sido válida para esa mujer, si ha sido importante o no."

Otra de las ONGs sugiere, por su parte, que también ellas deberían participar en las reuniones de evaluación del proceso de implementación del Protocolo marco.

(E31) "Las ONGs nunca hemos participado en ninguna de esas reuniones y lo hemos pedido muchas veces como red española y nos han dicho que no podemos participar, que solo podemos presentar nuestras aportaciones".

IV. CONCLUSIONES

La protección jurídica y la asistencia a las víctimas constituye el núcleo del actual modelo holístico y victimocéntrico en el abordaje del fenómeno de la trata de seres humanos. Este modelo, que ha recibido un impulso notable a nivel internacional gracias al Tratado de Varsovia y la Directiva europea sobre trata de seres humanos, obliga los Estados a desarrollar los mecanismos para prestar la protección y la asistencia necesarias tanto en el contexto del proceso penal como a los efectos de procurar el restablecimiento personal de las víctimas.

La prestación de la asistencia se halla condicionada en este ámbito por la propia idiosincrasia del delito. En este sentido, el proceso cosificador al que ha sido sometida la víctima por parte de sus captores y explotadores, frecuentemente mediante el empleo del abuso, el fraude, la violencia y la intimidación, contribuye al proceso de despersonalización de aquella. Asimismo, detectada la víctima, es posible que ésta viva atenazada por las amenazas de aquellos, y de hecho no son en absoluto desconocidos por algunos de los profesionales entrevistados en el marco de esta investigación, episodios en los que los tratantes han hecho realidad sobre la víctima o seres próximos los peores augurios. En este contexto, la intervención protectora deviene indispensable, tanto en el ámbito del proceso penal, dado que la víctima es también testigo directo de las actividades de los tratantes, como en el ámbito estrictamente asistencial, para lograr su recuperación a nivel personal.

La realización de un estudio empírico en el que han participado 37 profesionales del ámbito del proceso penal así como del ámbito asistencial ha permitido conocer en profundidad los mecanismos de los que los profesionales disponen y aquellos que más útiles resultan para garantizar la protección a las víctimas de trata. Llegados a este punto resulta importante no tanto recapitular cuales son estas medidas, sino poner de relieve

aquellas cuestiones que exigen ser revisadas, actualizadas y reformuladas en aras a proporcionar una efectiva protección a las víctimas de trata.

En el ámbito del proceso penal, las medidas de protección se centran, como hemos visto, en el reconocimiento del período de restablecimiento y reflexión, el reconocimiento de medidas de protección de la LO 19/1994, de protección de testigos y peritos en causa criminales y, en tercer lugar, la preconstitución de la prueba testifical. Al respecto cabe efectuar algunas consideraciones, a modo de conclusión, dirigidas a posibilitar la adopción de medidas que complementen o suplan las que se relatan en este trabajo. Así, en primer lugar, alcanzada una ampliación legal del plazo del periodo de restablecimiento y reflexión (que pasa de 30 a 90 días prorrogables por mor de la LO 8/2015) deviene necesario disgregar esta medida de la normativa de extranjería, tomando en consideración que un periodo de estas características, en el que se ofrece asistencia social a la víctima mientras ésta decide si desea colaborar con las autoridades en la persecución y enjuiciamiento del delito, no debe quedar restringida a aquellas víctimas que están en situación administrativa ilegal y afectadas por un procedimiento administrativo de expulsión. También las víctimas nacionales y aquellas cuya situación legal se halla regularizada pueden requerir de un periodo de asistencia en el que rehacerse de los efectos del delito antes de optar por colaborar o no con las autoridades. Asimismo es necesario adoptar estrategias para que este mecanismo deje de funcionar como moneda de cambio a los efectos de presionar para conseguir la colaboración de las víctimas en la investigación.

En segundo lugar, en lo que a las medidas de protección a la víctima respecta deviene indispensable una actualización de las previsiones de la Ley 19/1994 que deje de considerar a las víctimas como meros testigos y les reconozca los derechos de protección necesarios para su intervención en el proceso penal. Ni la figura del testigo protegido ni la ocultación de su identidad devienen suficientes en la práctica para garantizar la anonimidad de la víctima, en particular cuando el juez debe desvelarla a petición de cualquiera de las partes una vez abierto el juicio oral, algo que ha sido duramente denunciado por parte de los diversos colectivos profesionales que intervienen en el proceso penal y de forma muy especial por profesionales de las oficinas de atención a la víctima.

En tercer lugar, el estrecho margen que la Ley del Estatuto de la víctima reconoce ahora para la preconstitución de pruebas testificales puede suponer un revés importante a una práctica ampliamente defendida por los integrantes del Ministerio Fiscal y reconocida también a nivel jurisprudencial, a pesar de ser menos conocida por otros profesionales. Se trata de una forma óptima de proteger a las víctimas y de salvaguardar el bienestar emocional que haya podido alcanzarse tras la una intervención asistencial.

Por ello, y a pesar de haber quedado esta medida restringida a víctimas menores de edad tras la aprobación de la Ley 4/2015, deberían explorarse nuevas fórmulas que permitan consolidar su aplicación también para las víctimas de trata adultas.

En el ámbito de la protección y asistencia personal y social a las víctimas, la principal conclusión que deriva del trabajo empírico efectuado es que se trata de una labor que ha venido siendo dispensada prácticamente en solitario por ONGs y otras entidades del tercer sector. El resto de profesionales, esto es, agentes policiales, miembros del ministerio fiscal, funcionarios penitenciarios y personal de las OAVs han intervenido solamente de forma tangencial en este ámbito, mostrándose los jueces al margen de esta cuestión. Policías y fiscales reconocen, con todo, la labor encomiable desarrollada por las entidades del tercer sector en la asistencia a las víctimas de trata, y ello a pesar de la escasez de recursos económicos de que disponen. Ambos colectivos profesionales admiten que la derivación de las víctimas a las entidades se produce de forma automática, incluso antes de que aquellas hayan sido efectivamente identificadas como tales. En este contexto, la labor desarrollada por las OAV ha venido a suponer poco más que un acompañamiento de las víctimas en el juicio y, en algunas ocasiones, la prestación de cierto apoyo psicológico dirigido a facilitar su encuentro con el juez.

Son pues las ONGs las que procuran un alojamiento seguro a las víctimas, las que las asisten a nivel psicológico durante el proceso de restablecimiento y reflexión o al margen del mismo, las que gestionan un apoyo económico, un proceso formativo, el aprendizaje del idioma si son extranjeras, etc. El camino no es fácil, sin embargo, para estas entidades. Faltan, en primer lugar, recursos económicos para poder desplegar las prestaciones de todo tipo que las víctimas requieren. Pero también para poder atender convenientemente a todas las víctimas de este fenómeno, lo que exige incluir junto a las mujeres a hombres, niñas y niños que han sido sometidos a cualquiera de las dimensiones de la trata (explotación laboral, criminal, sexual, etc.), también cuando están afectadas por algún tipo de discapacidad o cuando son localizadas en zonas no urbanas donde se cuenta con menos recursos.

En segundo lugar, debería esclarecerse si la asistencia a las víctimas debe ser prestada por la administración o si se opta por un patrón de derivación a entidades del tercer sector, como ha venido observándose en este trabajo. De optarse por este segundo modelo debería asegurarse un mayor reflejo normativo de la intervención de tales entidades, pues ni el protocolo marco en su momento, ni el Estatuto jurídico de la víctima actualmente, definen el papel de estas entidades en la prestación de asistencia a las víctimas.

Y finalmente, una correcta atención a las necesidades de las víctimas requiere de un trabajo coordinado entre los distintos colectivos profesionales implicados. Para ello es

necesario que se establezcan circuitos claros de actuación en los que todos los profesionales tengan claro en qué momento va a poder requerirse su actuación, quién coordina cada intervención y con qué entidades se cuenta en cada territorio para la prestación de cada servicio, de tal modo que el elevado grado de compromiso observado en los profesionales entrevistados y la calidad de las intervenciones que actualmente se prestan no quede resentida por déficits organizativos sin duda mejorables.

V. BIBLIOGRAFÍA

ALCÁ CER GUIRAO, R. "Testimonio de menores y garantías de un proceso equitativo: consideraciones al hilo de la STC 174/2011, de 7 de noviembre", *La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n.100, 2013.

BRAUN, V. y CLARKE, V., "Using Thematic analysis in Psychology", *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 2006

CORBIN, J. y STRAUSS, A., *Basics of Qualitative Research*, 3e, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 2008.

DENZIN, N.K. y LINCOLN, Y.S., "Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research", en DENZIN, N.K. y LINCOLN, Y.S., (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 3rd. edition, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2002.

FARRELL, A. y PFEFFER, R., "Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653, 2014.

FARRELL, A., "Environmental and Institutional Influences on Police Agency Responses to Human Trafficking", *Police Quarterly*, Vol. 17, 1, 2014

FERREIRO BAAMONDE, X., "As oficinas de asistencia ás vítimas: bases para súa implantación na Comunidade autónoma de Galicia", *REGAP: Revista galega de administración pública*, 39, 2005.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 5/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración*, 2011, archivo accesible en <https://www.fiscal.es/> (últ. visita 15 de enero de 2017).

GUEST, G., MCQUEEN, K. M. y NAMEY, E.E., *Applied Thematic Analysis*, Sage Publications, Los Angeles/London/New Delhi/Singapore, Washington DC, 2012.

KAYE, J., WINTERDYK, J. y QUARTERMAN, L., "Beyond Criminal Justice: A Case Study of Responding to Human Trafficking in Canada", *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, Vol. 56, núm. 1, 2014.

LINCOLN, Y.S., "Institutional review boards and methodological conservatism. The Challenge to and from Phenomenological Paradigms", DENZIN, N.K. y LINCOLN, N.S.,

(Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 3rd. edition, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2002.

MARSHALL, C. y ROSSMAN, G.B., *Designing qualitative research*, Sage Publications, Thousand Oaks/London. New Delhi, 2006.

MARTÍN RÍOS, P., *Víctima y Justicia penal*, ed. Atelier, Barcelona, 2012.

MAY, K.A., "Conocimiento abstracto: un caso a favor de la magia en el método", en MORSE, J.M., (Ed.), *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*, Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 2005.

NAVARRO VILLANUEVA, C., "La protección del testimonio menor de edad. El valor probatorio de la declaración testifical del menor víctima realizada en la fase de instrucción", *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, 2-4, 2009.

POMARES CINTAS, E., "El delito de trata de sers humanos con finalidad de explotación laboral", *RECPC: Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, 13-15, 2011.

POMARES CINTAS, E., *El derecho penal ante la explotación laboral y otras formas de violencia en el trabajo*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

TAMARIT, VILLACAMPA y SERRANO, *El Estatuto de las Víctimas de delitos*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

VILLACAMPA ESTIARTE, C., "Víctima menor de edad y proceso penal: especialidades en la declaración testifical de menores-victimas", *RDPC*, 2005.

VILLACAMPA ESTIARTE, C., *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional*, Ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor 2011

VILLACAMPA ESTIARTE, C., "Víctimas de la trata de seres humanos: su tutela a la luz de las últimas reformas penales sustantivas y procesales proyectadas", *Indret*, 2014

VILLACAMPA ESTIARTE, C.; TORRES ROSELL, N., "Mujeres víctimas de trata en prisión en España", *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 8, 2012

WARRIA, A., NEL, H. y TRIEGAARDT, J., "Challenges in Identification of Child Victims of Transnational trafficking", *Practice: Social Work in Action*, 2015.

OKOBATA, *Trafficking in human beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach*, , Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006

OBOOKATA, "Trafficking of Human Beings as a crime against humanity: some implications for the international legal system", *International and Comparative Law Quarterly*, 45, 2005

OBOOKATA, "Smuggling of Human Beings from a Human Rights Perspective: Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law", *International Journal of Refugee Law*, 17, 2005